

## Historia de un manifiesto

### Una introducción al *derecho de la constitución* de Albert Venn Dicey\*

Héctor Domínguez Benito\*\*

«Como constitucionalistas, tenemos una gran ventaja en el hecho de que ningún jurista estimable haya escrito sobre esta materia desde hace años», reconocía por carta Albert Venn Dicey (1835-1922) a su compañero William Anson el 29 de enero de 1885, en plena recta final de la preparación de sus *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*<sup>1</sup>. Ambos tenían en mente un proyecto similar: un manual que acercase la constitución inglesa a los estudiantes poniendo el foco, en la medida de lo posible, en su dimensión estrictamente jurídica, al margen de excesos históricos o filosóficos. Al publicar el primer volumen de su *Law and Custom of the Constitution*, apenas un año después, Anson reconocería en el Prefacio la distancia entre la obra de Dicey y la suya: «él ha dibujado con un pulso preciso aquellos rasgos que distinguen nuestra constitución de otras, ofreciéndonos un dibujo que difícilmente dejará de impresionar la mente de aquellos que tengan un sentido de la realidad. Yo he intentado hacer un mapa de una porción de su superficie [de la constitución] y completar los detalles. Él ha hecho el trabajo de un artista. Yo he intentado hacer el trabajo de un topógrafo»<sup>2</sup>.

Aunque Sabino Cassese ya se ha hecho eco de la última parte de la cita<sup>3</sup>, la que verdaderamente nos da la medida de lo que quiere expresar Anson es la primera: para este la obra de arte reside en la habilidad de Dicey a la hora de comparar la constitución

---

\* Publicado en Albert Venn Dicey, *El derecho de la constitución*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 9-75. Las referencias internas contenidas en este texto se refieren a dicha edición.

\*\* Profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Autónoma de Madrid (hector.dominguez@uam.es). Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España con referencia DER2014-56291-C3-1-P.

<sup>1</sup> Así se recoge en Mark D. Walters, «Dicey on Writing the Law of the Constitution», *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 32, núm. 1, 2012, p. 29.

<sup>2</sup> William R. Anson, *The Law and Custom of the Constitution, Part I: Parliament*, Oxford, Clarendon Press, 1886, p. v.

<sup>3</sup> Sabino Cassese, *Derecho administrativo: historia y futuro* (Coord. de la trad. Alicia Isabel Saavedra-Bazaga), Sevilla, Global Law Press - Instituto Nacional de Administración Pública, 2014 [2010], p. 186.

inglesa con otras constituciones. Sin embargo, conviene tener en cuenta que con la mera comparación no nos encontramos ante una innovación metodológica propiamente dicha. Como Frederick Pollock recordaría a sus colegas continentales en el célebre Congreso de 1900, el derecho comparado no podía «fundarse» en ese preciso instante: los británicos llevaban haciéndolo décadas sin denominarlo así<sup>4</sup>. ¿De dónde deriva, entonces, esta atribuida cualidad de «artista»? ¿Qué es lo que tuvo –tiene– *El derecho de la constitución* para haber sobrevivido al paso de los años como referente ineludible en el canon de la literatura jurídica británica?

Responder a estas preguntas es imposible sin prestar una atención especial al contexto en el que tuvo lugar la concepción y el lanzamiento de esta obra. Para ello, se ofrece en primer lugar un pequeño bosquejo biográfico, con el objetivo de poner al lector al corriente del ambiente intelectual que rodeó la vida de Dicey<sup>5</sup>, y particularmente la redacción de la obra (apartado I). A continuación se aborda el carácter de «manifiesto» de esta, tanto en el plano académico (apartado II) como en el político (apartado III), además de ofrecer una panorámica de las nociones canónicas consagradas por el jurista británico y algunas de sus críticas más comunes (apartado IV), sin perder de vista qué es lo que cambió en sus dos modificaciones posteriores más importantes (apartado V)<sup>6</sup>. Tras exponer las principales ideas en una breve conclusión (apartado VI), por último se enumeran las ediciones y traducciones de esta obra hasta el momento, las referencias más importantes dentro de la extensa bibliografía de Dicey y una serie de fuentes secundarias básicas a la hora de acercarse al impacto de la obra (apartados VII, VIII, IX).

---

<sup>4</sup> Héctor Domínguez Benito, «Frederick Pollock en París, o la naturaleza conflictiva del derecho comparado», *Revista de Historia del Derecho*, núm. 55, 2018, pp. 91-126.

<sup>5</sup> En orden cronológico, Robert S. Rait (ed.), *Memorials of Albert Venn Dicey, Being Chiefly Letters and Diaries*, Londres, Macmillan, 1925; Richard A. Cosgrove, *The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian Jurist*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1980; Trowbridge H. Ford, *Albert Venn Dicey: The Man and his Times*, Chichester, Barry Rose, 1985.

<sup>6</sup> Pese a que nadie lo diría a juzgar por el estilo y la fuerza de su Introducción de 1915, Dicey tenía ya 79 años cuando la redactó. Demasiada edad como para pensar en cambiar el esquema general de su obra. Algo similar ocurría con la edición de 1908, a pesar del esfuerzo exhibido a la hora de remozar la comparativa entre el caso británico y el francés en el célebre capítulo «El *rule of law* comparado con el *droit administratif*». Sobre este punto se llama especialmente la atención en Frederick Henry Lawson, «Dicey Revisited I», *Political Studies*, vol. 7, núm. 2, 1959, p. 109. Sin embargo, casi toda la literatura secundaria sobre esta obra se basa en las dos ediciones mencionadas o en la edición póstuma de 1959, sin tener muy claro cuándo fue escrita cada cosa que se utiliza.

## I. ALBERT VENN DICEY: VICTORIANO HASTA 1922

### 1. Años de formación

Albert Venn Dicey nació el 4 de febrero de 1835 en Claybrook Hall, en el condado de Leicestershire. Su familia paterna era originaria de Northampton y estaba vinculada al mundo del periodismo; su familia materna, la saga de los Stephens, había tenido y tendría un papel relevante en el mundo jurídico y político británico del siglo XIX. La vinculación entre ambas familias viene del período como estudiante en la Universidad de Cambridge de Thomas Edward Dicey, padre del jurista. Allí se vincularía a la denominada secta de Clapham, de inspiración abolicionista, entablando amistad con James Stephen, hermano de su futura mujer, Anne Mary. De hecho, el *middle name* Venn es un homenaje a John Venn, rector de la Iglesia de Clapham y suegro de James Stephen.

Educado en casa durante mucho tiempo por su madre, temerosa de que se viera influenciado por el resurgir del catolicismo y doctrinas afines en auge, no fue hasta los diecisiete años cuando salió de casa por primera vez para estudiar en la *King's College School* de Londres. Su buen rendimiento le permitió afrontar las pruebas de acceso al Balliol College de Oxford dos años después, donde obtendría un *Double First* en «*Classical moderations*» (1856) y en «*Literae Humaniores*» –o «*Greats*»– (1858)<sup>7</sup>. Allí coincidió por primera vez con personajes clave en su vida, casi todos miembros de la sociedad de ensayos *The Old Mortality Society*, una especie de remedo oxoniense de la *Cambridge Conversazione Society* –los famosos Apóstoles– formada en 1857 y que funcionó alrededor de diez años<sup>8</sup>. Dicey se reunía todos los sábados con otros estudiantes como James Bryce, Edward Caird, Thomas Hill Green, Thomas Erskine Holland, Henry Nettleship, John Nichol o Algernon Charles Swinburne para discutir pequeños ensayos sobre arte, literatura o política<sup>9</sup>. Swinburne llegaría a ser un reconocido poeta, mientras que todos los demás acabarían ocupando cátedras en Oxford o en Glasgow.

<sup>7</sup> Roger Michener, «Foreword», en Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Indianápolis, Liberty Fund, 1982 [8ª ed., 1915], p. xiii.

<sup>8</sup> Gerald C. Monsman, *Oxford University's Old Mortality Society: A Study in Victorian Romanticism*, Lewinston, The Edwin Mellen Press, 1988.

<sup>9</sup> Muchos de estos ensayos pueden encontrarse en una reimpresión de la revista que editó el propio grupo. F.J. Sypher (ed.), *Undergraduate Papers: An Oxford Journal (1857-1858)*, Nueva York, Scholar's Facsimiles & Reprints, 1974.

Terminado su paso por el Balliol, y con el objetivo de poder congraciarse con académicos que pudieran facilitar su vinculación con la Universidad por medio de una *fellowship*, como Edward Augustus Freeman o William Stubbs<sup>10</sup>, decidió presentarse al *Arnold Prize* de ensayo histórico para graduados. Galardones como este constituían símbolos reconocibles de la institucionalización de la Historia como disciplina académica desde mediados del siglo XIX. El *Arnold Prize* en concreto se instituyó en 1850, y premiaba con 42 libras al mejor ensayo de Historia clásica o de Historia moderna, alternando de año en año la materia, a juicio de un tribunal formado por el *Regius Professor of Modern History*, el *Regius Professor of Ecclesiastical History*, y el *Camden Professor of Ancient History*<sup>11</sup>. En 1860, Dicey obtuvo el premio con su ensayo sobre el *Privy Council*, que sería publicado ese mismo año por T & G Shrimpton y, en 1887, reimpreso por Macmillan y lanzado en Inglaterra y Estados Unidos, más que probablemente para aprovechar el tirón de *El derecho de la constitución*.

Aunque en el Prefacio de la reimpresión de *The Privy Council* el propio Dicey advierte que nos encontramos ante un «inmaduro y juvenil intento de esbozar el desarrollo de una gran institución»<sup>12</sup>, este trabajo claramente sienta las bases de una idea que sería importante para *El derecho de la constitución*: su visión según la cual «el espíritu del momento durante el siglo XVI era un espíritu de interferencia» y «el Gobierno se entrometía en temas religiosos, en cuestiones de trabajo, y en asuntos de la vida privada»<sup>13</sup> fue más que seguramente decisiva para forjar el convencimiento de que en la Inglaterra del siglo XVI y parte del siglo XVII «ideas [...] que fueron corrientes, cuando no predominantes, mostraban una gran similitud con las doctrinas que han dado lugar al derecho administrativo de Francia» (pp. 214 y ss.; pp. 369 y ss.). Este punto de partida

---

<sup>10</sup> Ambos aparecen mencionados en la primera Lección de *El derecho de la constitución*, en la que presenta las claves metodológicas importantes de la obra intentando desmarcarse, entre otras cosas, del historicismo. Aunque Freeman aparece tratado con una gran deferencia, Dicey se vale de un ejemplo de su aproximación «de anticuario» para descartar su perspectiva (pp. 90-91). No obstante, es indudable la influencia de Freeman en la concepción diceyana de las convenciones de la constitución (pp. 306-307), sobre en la que en cualquier caso volveremos más adelante. Por su parte, Dicey lamenta que Stubbs se hubiera consagrado a menesteres religiosos dejando de lado los académicos en los últimos tiempos, aunque la escogida referencia a su «erudición» (pp. 90-93) invita a pensar que su diagnóstico no difería demasiado del de Freeman respecto de la utilidad de su método. Se ha llegado a señalar, de hecho, que *El derecho de la constitución* debe ser entendido, al menos en parte, como una refutación a Stubbs. Ver James Vernon, «Narrating the Constitution: The Discourse of 'The Real' and the Fantasies of Nineteenth-Century Constitutional History», en James Vernon (ed.), *Re-reading the Constitution. New Narratives in the Political History of England's Long Nineteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 217-218. Una cuestión significativa es la importancia que daba a la *Magna Carta* el Obispo de Chester, para quien la historia constitucional inglesa era «poco más que un comentario a la misma». Dicey ignoraría casi sistemáticamente dicho documento. Sobre este particular, John W. Allison, «Minimising Magna Carta and modernising exposition of the rule of law in the English historical constitution», en Christopher May y Adam Winchester (eds.), *Handbook of the Rule of Law*, Cheltenham, Edward Elgar, 2018, p. 154.

<sup>11</sup> Philippa Levine, *The Amateur and the Professional: Antiquarians, Historians and Archaeologists in Victorian England, 1838-1886*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 142.

<sup>12</sup> Albert Venn Dicey, *The Privy Council. The Arnold Prize Essay 1860*, Londres y Nueva York, Macmillan, 1887, p. v.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 109.

aparentemente paradójico, y por tanto revestido de un efectismo muy congruente con el espíritu de *El derecho de la constitución*, sería muy importante a la hora de construir la comparación entre el *rule of law* y el *droit administratif*.

Aprovechando el impulso del *Arnold Prize*, Dicey accedió a una *fellowship* en el *Trinity College*, en la que sin embargo apenas ocuparía de manera efectiva un año, por la imposibilidad de compatibilizarla con la práctica jurídica en Londres. Allí mantuvo el contacto con sus compañeros de la *Old Mortality Society*, con quienes seguía atentamente los sucesos en Italia y en Estados Unidos desde principios de la década y, desde mediados, en Jamaica. En esta época Dicey toma un mayor contacto con tesis liberales, simpatizando especialmente con la obra de John Stuart Mill, que reseñaría de forma muy positiva en el recién creado semanario londinense *The Reader*<sup>14</sup>. Green, considerado el padre póstumo del *new liberalism*, introdujo a Dicey y Bryce en la «política de verdad», llevándoles a presenciar mítines de John Bright<sup>15</sup>. Bryce, tres años menor, antiguo compañero en la *Old Mortality* y alumno en su breve paso por el *Trinity*, había seguido su mismo camino ganando el *Arnold Prize*, obteniendo una *fellowship* en Oxford, y desembarcando en *Lincoln's Inn* para probar suerte en el mundo de los *practitioners*. El perfil universitario de ambos, junto con el hecho de que accedieran de forma casi simultánea a un mundo que poco o nada tenía que ver con su formación académica, sería muy decisivo para el devenir de la ciencia jurídica en Oxford: ambos desarrollaron una curiosidad por la enseñanza jurídica que vería sus efectos dos décadas después.

Se estaba fraguando la generación de los denominados «*university liberals*», que alcanzaría su primer gran hito con la publicación, coincidiendo con los debates sobre la reforma electoral de 1867, de los *Essays on Reform*, libro colectivo en el que buena parte de los jóvenes intelectuales herederos de la *Old Mortality* y otros círculos similares se posicionaban a favor de la ampliación del sufragio<sup>16</sup>. En su ensayo en esta obra Dicey, apoyándose precisamente en John Bright, criticaba la idea de clase social. Mientras que concebía la nación y el individuo como partes de un todo que era inútil comparar entre sí, la identidad de clase partía de una presuposición errónea: que esta era capaz de definir los intereses más esenciales del individuo<sup>17</sup>. Al lector familiarizado

<sup>14</sup> Ford, op. cit. (n. 5), pp. 83-84.

<sup>15</sup> Melvin Richter, citado en Ford, op. cit. (n. 5), p. 75.

<sup>16</sup> El mejor aporte respecto a esta generación sigue siendo Christopher Harvie, *The Lights of Liberalism: University Liberals and the Challenge of Democracy, 1860-1886*, Londres, Allan Lane, 1976.

<sup>17</sup> Albert Venn Dicey, «The Balance of Classes», en George Charles Brodrick *et al.*, *Essays on Reform*, Londres, R. Clay, Son, & Taylor Printers, 1867, pp. 67-84. Aunque, naturalmente, no todos los autores compartían la visión de Dicey. Para el filósofo Richard Holt Hutton, por su parte, sería positivo incorporar el *esprit de corps* de pequeñas organizaciones como los sindicatos «a la más amplia organización de la nación». Richard Holt Hutton, «The Political Character of the Working Classes», en *ibid.*, p. 27-44.

con el Dicey de la última época no le parecerá remoto este punto de vista, que adelanta algunas de las ideas que apuntalarían obras como *Law and Public Opinion* o escritos como la «Introducción» a la edición de 1915 de *El derecho de la constitución*, lo que no hace sino ponernos en guardia ante posibles visiones hiperbólicas de la condición demócrata o radical de los llamados «liberales académicos»<sup>18</sup>. Este punto de partida colectivo no trascendió demasiado en su momento, dada la juventud y poca influencia de los autores. A pesar de ello, teniendo en cuenta la proyección que posteriormente tuvieron buena parte de ellos, fue reivindicado y reeditado de distintas formas al cumplirse los cien años de su publicación, situándolo como una referencia de la cultura política victoriana que no tendría nada que envidiar a otras obras más glosadas como *Culture and Anarchy* de Arnold o *The English Constitution* de Bagehot<sup>19</sup>.

## 2. Dicey y su obra

La carrera como abogado de Dicey no fue todo lo brillante que esperaba; entre otras cosas no facilitó su esperado salto a la política<sup>20</sup>. Además de sus habituales colaboraciones periodísticas, empezó a compatibilizar la práctica jurídica con la docencia de un curso de Lógica en el *Working Men's College* de Londres, al parecer también de manera poco exitosa. No obstante, a bien seguro esta nueva experiencia docente también fue importante a la hora de concebir la que fue su primera obra relevante: *A Treatise on the Rules for the Selection of the Parties to an Action*. Para quien llega a Dicey a través de *El derecho de la constitución*, en este tratado de juventud también hay algo muy familiar. Criticando las aproximaciones de anteriores autores que habían escrito sobre el derecho de las partes, el jurista lamentaba que se hubiera entendido esta rama como meramente subsidiaria al derecho práctico, y por consiguiente se le negara «un tratamiento completo y sistemático». Así las cosas, lo relevante de esta obra de naturaleza procesal es que el jurista la aborda con el objetivo de «hacer aparente el hecho de que esta rama del derecho, de alguna forma compleja

<sup>18</sup> Para una visión excesivamente «democratizante» de Dicey, incluso a propósito de *El derecho de la constitución*, James Kirby, «A.V. Dicey and English Constitutionalism», *History of European Ideas*, 2018, pp. 2-14.

<sup>19</sup> Lo hace Christopher Harvie en la reseña publicada con motivo de la reedición de los *Essays on Reform* por su centenario, en *The Historical Journal*, vol. 11, núm. 3, 1968, pp. 592 y ss.

<sup>20</sup> Lo cierto es que a mediados del siglo XIX ser abogado en Inglaterra no era una profesión muy boyante (por ejemplo, James Fitzjames Stephen, primo de Dicey, se embolsaba más de tres libras por artículo periodístico y ganaba solamente cincuenta al año como abogado, incluso después de varios años de carrera profesional), por lo que uno de los principales atractivos de la abogacía en ese momento era la posibilidad de acceder al Parlamento o a toda suerte de nombramientos políticos. Ver John Royston Lewis, *The Victorian Bar*, Londres, Robert Hale, 1982, pp. 35-59.

e intrincada, es la expresión de unos pocos principios simples sobre los que depende»<sup>21</sup>. Con el mismo espíritu se acercaría años más tarde a la constitución. Es en este tratado donde se ve por primera vez un rasgo muy característico de la escritura diceyana en *El derecho de la constitución*, deudor seguramente del influjo de Austin: la costumbre de enunciar un principio para después ejemplificarlo con casos simples<sup>22</sup>.

Dejando a un lado las cuestiones de enfoque y estilo, tiene sentido pensar que sin este período de asimilación de la práctica jurídica y de sistematización de casos civiles las cosas hubieran sido muy distintas para Dicey también en un sentido puramente material. Al explorar el último de los tres sentidos que componen el concepto básico de *El derecho de la constitución*, sostiene que la misma «está impregnada por el *rule of law*, sobre la base de que los principios generales de la constitución (como, por ejemplo, el derecho a la libertad personal o el derecho de reunión pública) son para nosotros el resultado de las resoluciones judiciales que determinan los derechos de personas privadas en casos particulares llevados ante los tribunales, mientras que bajo muchas constituciones extranjeras la seguridad otorgada a los derechos de los individuos es o parece ser el resultado de los principios generales de la constitución», a lo que acto seguido añade en una nota al pie: «las declaraciones de derechos parlamentarias, tales como la *Petition of Right* y el *Bill of Rights*, tienen cierta afinidad con las resoluciones judiciales» (p. 217). Y es que en definitiva, si la constitución es el resultado de la aplicación del *ordinary law of the land* a todos los súbditos de la Corona, esto quiere decir que «los principios del derecho privado han sido tan extendidos por la acción de los Tribunales y el Parlamento como para determinar la posición de la Corona y sus servidores» (p. 222). Esto es, la constitución se garantiza mediante la aplicación del derecho privado por parte de los Tribunales. Habrá tiempo más adelante, en todo caso, para volver sobre estas cuestiones de contenido.

Con su libro recién publicado, Dicey emprende junto con Bryce un viaje crucial a Estados Unidos, sin el que según palabras del propio jurista *El derecho de la constitución* no se habría llegado a escribir. Los dos jóvenes abogados recorrerían la Costa Este de Estados Unidos estableciendo contactos –muchos de ellos facilitados por

---

<sup>21</sup> Albert Venn Dicey, *A Treatise on the Rules for the Selection of the Parties to an Action*, Londres, William Maxwell & Son, 1870, pp. iii-iv. En la selección del tema, sugerido por Bryce, Dicey arriesgaba mucho. Estaba tratando de sistematizar una rama del derecho tremendamente confusa, que parecía bastante claro que iba a cambiar de manera inminente por la expectativa de que se fusionasen los Tribunales de *law* y de *equity*. Las *Judicature Acts* de 1873 y 1875 trajeron la esperada reforma, de modo que el libro quedó rápidamente eclipsado, lo que no fue óbice para que un Dicey ya anciano reconociera en 1917 que había sido su mejor libro jurídico.

<sup>22</sup> Cosgrove relaciona esta forma de proceder con el popular método de sistematización consagrado por Austin, en líneas generales concordante con los presupuestos de Dicey, en Richard A. Cosgrove, *The Rule...*, op. cit. (n. 5), p. 25.

su primo Leslie Stephen— entre buena parte de la élite intelectual estadounidense del momento, como los académicos de la Universidad de Harvard que, al calor de las reformas modernizadoras de Charles William Eliot, revolucionaban los métodos de enseñanza jurídica con Christopher Columbus Langdell a la cabeza, o editaban revistas tan solventes como la *American Law Review* y, en definitiva, podía decirse que iban camino de fundar una verdadera maquinaria alrededor de los estudios y la investigación en ciencia jurídica, algo con lo que apenas podía soñar un inglés en 1870. Dicey y Bryce avasallaron a preguntas a sus colegas norteamericanos, como recordaría bromeando Eliot décadas después. Parece ser que no quedaron muy convencidos de la heterodoxia de los *case studies* de Langdell<sup>23</sup>, pero Dicey se retractaría años más tarde de ese escepticismo inicial<sup>24</sup>.

En 1872, pasó fugazmente por la Universidad de Manchester, encargándose de un curso de derecho, y contrajo matrimonio con Elinor Bonham-Carter, hija y nieta de influyentes Miembros del Parlamento. Cuatro años más tarde fue nombrado consejero para la *Inland Revenue*, algo que tampoco facilitó su salto a la política. La posibilidad de optar a una cátedra de derecho internacional llevó a Dicey a abordar la que sería su primera incursión en el mundo del —para él mal llamado— derecho internacional privado: *The Law of Domicil as a Branch of the Law of England* (1879). Su propósito era claro, trasponer el efectivo método que le había llevado a conseguir un modesto reconocimiento gracias a su primera obra jurídica: codificar mediante una serie de principios y ejemplos simples las normas y casos dispersos para determinar el domicilio de las partes. Esta vez llevaría la técnica a un nivel más depurado y esquemático todavía, valiéndose de los marcos generales que proporcionaban las obras sobre esta materia de Phillimore o Westlake, pero limpiándolos de toda aproximación histórica o teórica. El título de la obra es muy significativo. La naturaleza, determinación y averiguación del domicilio es una parte del derecho de Inglaterra que no se concibe como objeto de un hipotético derecho internacional, porque para Dicey solo es derecho lo que se fundamenta sobre la autoridad de «nuestro propio» Estado<sup>25</sup>. Este

<sup>23</sup> Edmund Ions, *James Bryce and American Democracy, 1870-1922*, Londres, Macmillan, 1968, pp. 74-75.

<sup>24</sup> Albert Venn Dicey, «The Teaching of English Law at Harvard», *Harvard Law Review*, vol. 13, núm. 5, 1900, pp. 422-440.

<sup>25</sup> Albert Venn Dicey, *The Law of Domicil as a Branch of the Law of England*, Londres, Stevens and Sons, 1879, pp. iv-vi. Aunque Dicey no se ocupaba del derecho de otros países, sí reconocía la importancia de la doctrina de autoridades como Savigny o Story y las prácticas de tribunales extranjeros, dado que «en esta rama del derecho, el derecho se encuentra influenciado por las teorías de juristas eminentes». Es más, en una intervención a propósito de la ampliación de los estudios de derecho internacional privado en Oxford, siendo ya Profesor emérito, Dicey afirmaría que a la cabeza de la escuela anglosajona consideraba aún a Story, mientras que al frente de la escuela continental se encontraba todavía Savigny. Ver Albert Venn Dicey, «The Extension of Law Teaching at Oxford», *Harvard Law Review*, vol. 24, núm. 1, 1910, pp. 1-5. Para la influencia del jurista alemán en la generación de Dicey, Michael H. Hoeflich, «Savigny and his Anglo-American Disciples», *The American Journal of Comparative Law*, núm. 37, 1989, pp. 17-37.



planteamiento, marcadamente contraintuitivo para alguien que en ese momento pretendía establecerse como profesor en una plaza de derecho internacional, nos da también pistas sobre la personalidad poco maleable de Dicey. *The Law of the Domicil* sería la primera piedra en el camino en una incursión en la disciplina que alcanzaría sus cotas más altas en 1896, con la publicación de *A Digest of the Law of England with Reference to the Conflict of Laws*, tratado que se sigue calificando como el más «icónico» de los manuales de derecho internacional privado en inglés. Se considera que ha mantenido su autoridad porque se acerca a cuestiones básicas «sobre las que incluso todavía hoy los Tribunales ingleses no han alcanzado una solución final»<sup>26</sup>, y ha seguido actualizándose gracias al trabajo de varios editores, desde Athur Berriedale Keith hasta Jonathan Harris.

La década de 1870 trajo a Dicey el deseo de volver a Oxford, donde hacía recurrentes visitas como examinador en algunos cursos de *Jurisprudence* y donde volvía a coincidir con Bryce, que había vuelto para ocupar el puesto de *Regius Professor of Civil Law*, y con Green, que ocupaba una cátedra de filosofía moral. Como reconocía en la correspondencia con sus amigos, toda vez que se marchó a Londres comenzó a echar en falta el ambiente familiar de la ciudad universitaria. La muerte de John Kenyon en 1880 abrió el proceso de nombramiento de otro *Vinerian Professor of English Law*, que Dicey ganó frente a candidatos como Anson y Pollock en 1882. En la cátedra se mantendría treinta y siete años, hasta 1909; después aceptó impartir lecciones de derecho internacional privado como Profesor emérito hasta 1913. En su cruzada por establecer una enseñanza «profesoral» de la ciencia jurídica, formó parte de la oleada de manuales a los que dio lugar la formación de la *Oxford Law School*, contexto en el que se enmarca la publicación de *El derecho de la constitución* en 1885. Esta dedicación al mundo académico, que se refleja en el sintomático hecho de que Dicey no abandonaría ya Oxford hasta prácticamente el final de sus días, no fue óbice sin embargo para que desistiera en su empeño por influir en el ámbito político, ya fuera esperando un ansiado nombramiento que nunca llegaba, o mediante la participación en el debate público, a través de varias obras de carácter algo menos académico y de cartas al editor en multitud de publicaciones periódicas. El Dicey *político* tenía dos grandes preocupaciones: el caso de Irlanda y, a medida que la relevancia de la cuestión social iba en aumento, el ascenso del colectivismo. Y fue capaz de integrarlas, de manera más o menos explícita, dentro de su enseñanza del derecho.

---

<sup>26</sup> William Cornish, «Private International Law», en John Baker (ed.), *The Oxford History of the Laws of England, Volume XI, 1820-1914*, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 282-285.

El protagonismo de Dicey en la escisión «unionista» del Partido Liberal en 1886, que se aliaría con los conservadores para evitar el *Home Rule* irlandés, se vio plasmado en libros como *England's Case against Home Rule* (1886), *Letters on Unionist Delusions* (1887; recopilación de sus columnas en el *Spectator*), *The Verdict: A Tract on the Political Significance of the Report of the Parnell Commission* (1890), *A Leap in the Dark or Our New Constitution* (1893), y finalmente *A Fool's Paradise, Being a Constitutionalist's Criticism on the Home Rule Bill of 1912* (1913). El punto de partida era el siguiente: el *Home Rule* se presentaba, en principio, como un simple esquema para el gobierno de Irlanda, pero también llevaba consigo «un plan para revolucionar la constitución de todo el Reino Unido»<sup>27</sup>. Su labor como opinador público en contra de las propuestas de autogobierno irlandés y de la aplicación al Imperio británico de un modelo federal se convertiría en uno de los principales tópicos de su carrera. Al margen de la cuestión irlandesa y su oposición al federalismo imperial, extremo sobre el que volveremos en el apartado III, Dicey se aliaría también con los sectores más férreos del Imperio en otras cuestiones controvertidas para el liberalismo británico como la Segunda Guerra bóer. Como él mismo señala en su Introducción a la edición de 1915, consideraba que había supuesto un conflicto necesario para evitar la secesión y mantener la unidad del Imperio, aunque se ha puesto de relieve que en la práctica puso a prueba la construcción diceyana sobre la ley marcial en la constitución británica<sup>28</sup>.

Más célebre sería entre sus escritos políticos, no obstante, la valoración del ascenso de la influencia del colectivismo en la legislación que fue *Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century* (1905; segunda edición en 1914), certeramente definida por Manuel Salguero en su edición en castellano como «un esfuerzo por relacionar la evolución del derecho inglés durante el siglo XIX con la evolución de la opinión inglesa»<sup>29</sup>. Particularmente influido por Bentham<sup>30</sup>, Dicey dividió en tres períodos la relación entre ambos factores: el período del viejo conservadurismo o de estancamiento legislativo hasta 1830; el período benthamista o individualista hasta 1865; y la época del colectivismo a partir de 1865. No obstante, aunque el utilitarismo

<sup>27</sup> Albert Venn Dicey, *England's Case against Home Rule*, Londres, John Murray, 1886, p. 17.

<sup>28</sup> En particular por el caso *Ex parte Marais* (1902), resuelto por el *Privy Council*, que ratificó el arresto de un civil bajo la ley marcial incluso cuando los tribunales ordinarios estuvieran funcionando normalmente. Dylan Lino, «The Rule of Law and the Rule of Empire: A.V. Dicey in Imperial Context», *The Modern Law Review*, núm. 81, vol. 15, 2018, pp. 754-755.

<sup>29</sup> Manuel Salguero, «Derecho legislado y opinión pública en las Lecciones de Albert Venn Dicey», en Albert Venn Dicey, *Lecciones sobre la relación entre derecho y opinión pública en Inglaterra durante el siglo XIX* (Trad. de Manuel Salguero e Isabel Molina Marín), Granada, Comares, 2007, p. xxx.

<sup>30</sup> Benigno Pendás García, *J. Bentham: política y derecho en los orígenes del Estado constitucional*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1988, pp. 194-195. Para la crítica más representativa a la interpretación de Bentham por parte de Dicey, ver John Bartlet Brebner, «Laissez Faire and State Intervention in Nineteenth-Century Britain», *The Journal of Economic History*, vol. 8, 1948, pp. 59-73. Para una crítica a la perspectiva histórica diceyana sobre el colectivismo entre 1865 y 1900, ver Stephen J. Lee, *Aspects of British Political History, 1815-1914*, Abingdon, Routledge, 1994, pp. 282 y ss.

había servido para consagrar una época de «individualismo», Dicey era de la opinión de que el movimiento colectivista del último período del siglo XIX y principios del XX era también muy deudor, de forma un tanto paradójica, del benthamismo: el principio de utilidad; el ejercicio de la soberanía parlamentaria, y la expansión del funcionamiento del gobierno<sup>31</sup> eran para el jurista máximas utilitaristas de las que el socialismo estaba sacando provecho. Sus intereses se orientaron entonces al estudio de (y la oposición contra) lo que denominó la «legislación de clase»<sup>32</sup>, reafirmando aquella aspiración de juventud profundamente individualista que durante la década de 1860 le había llevado a expresar en los *Essays on Reform* sus reparos frente a la representación de cualquier tipo de lucha de clases sociales dentro del funcionamiento del sistema político.

### 3. Dicey después de Dicey

Durante el tramo final de su vida, Dicey vivió en un mundo que había dejado de ser el suyo. Tras su retirada definitiva de la enseñanza en 1913 buena parte de sus amigos había fallecido, y los pocos que iban quedando comentaban entre sí lo difícil que era comunicarse con él debido a una sordera que iba en aumento.

La Introducción de 1915, de considerable extensión y concebida para evitar tener que actualizar una vez más *El derecho de la constitución*, es sin duda el texto que mejor sintetiza las preocupaciones del Dicey más tardío, cuyos principios más elementales seguían siendo los mismos pese a que el escenario al que se enfrentaba era marcadamente diferente. Dicey se dedicó a combatir fenómenos nuevos, como la influencia de las maquinarias partidistas en las instituciones –y en particular en el Parlamento– o las demandas en favor del sufragio femenino, además de otros no tan nuevos como el rebrote de ideas en pro de la federalización del Imperio, esta vez formuladas desde las propias colonias<sup>33</sup>.

A diferencia del rumbo de otros coetáneos, la I Guerra Mundial no aplacó la visión *whig* de Dicey. Al final de la Introducción podemos percatarnos de lo que el estallido del

<sup>31</sup> Albert Venn Dicey, *Lecciones...*, op. cit. (n. 29), 277-282. Ver, asimismo, W. H. Greenleaf, *The British Political Tradition, Volume I: The Rise of Collectivism*, Londres, Methuen, 1983, p. 256.

<sup>32</sup> W.H. Greenleaf, *The British Political Tradition, Volume II: The British Political Tradition, Volume II: The Ideological Heritage*, Londres, Methuen, 1983, p. 284.

<sup>33</sup> Grupos informales como el denominado *Kindergarten* de Milner en Sudáfrica comenzaron a promover una nueva perspectiva sobre el imperialismo federal, que se diferenciaba de las propuestas de finales del siglo XIX en que no solamente apelaba a los intereses británicos, sino que incorporaba la perspectiva de los dominios, y que cristalizó con la fundación del movimiento *The Round Table*. Ver Richard Symonds, *Oxford and Empire: The Last Lost Cause?*, Londres, Macmillan, 1986, pp. 62-79.

conflicto había supuesto para él: siendo una situación grave y peligrosa, dado el poder militar de Alemania, Dicey la veía al mismo tiempo como una especie de ventana de oportunidad que sería capaz de aunar a los británicos y, de alguna forma, redimirlos de los problemas en los que estaba sumido su sistema político. Dado que la defensa era precisamente una de las justificaciones principales del mantenimiento del Imperio y del liderazgo de Inglaterra, parecía claro a juicio de Dicey que esto serviría para cohesionar y fortalecer de nuevo el decadente orden político.

Poco después del estallido de la Guerra ofreció un discurso en el *Working Men's College* de Londres del que saldría publicado un pequeño panfleto, en el que mezclaba argumentos jurídicos con proclamas patrióticas. La justicia y la *equity*, señalaba Dicey, tenían que imponerse al barbarismo y al militarismo sin confundirse con la indulgencia o la caridad<sup>34</sup>. Aunque buena parte de sus argumentos contra Alemania se basaban en el incumplimiento de acuerdos internacionales, Dicey dejó claro desde el primer momento que no quería verse envuelto en la circulación de debates sobre la construcción de nuevas instituciones para la promoción de la paz o la prevención de la guerra una vez terminara el conflicto: «de alguna forma», señalaba en privado, «me alegra creer que no estaré mezclado con muchas de las inútiles controversias que ocuparán los primeros años de la paz»<sup>35</sup>.

Después de implicarse en una oportuna reedición de los comentarios de William Wordsworth a la Convención de Sintra ante el escenario bélico de un siglo atrás<sup>36</sup>, Dicey se volcó en preparar la que sería su última obra, un repaso por la historia de la unión con Escocia escrito al alimón con el historiador Robert S. Rait, quien posteriormente se encargaría de su homenaje póstumo en forma de recopilación de cartas y otros materiales. La Introducción de 1915 también adelanta claves de su libro sobre Escocia, dado que Dicey ofrece un pasaje tremendamente laudatorio del *Act of Union* de 1707, lamentando el ascenso del nacionalismo escocés. El libro sería algo más mesurado, apuntando que la grandeza del *Act* consistió en unir a los dos territorios políticamente y a la vez permitir el mantenimiento de los dos nacionalismos<sup>37</sup>, algo ciertamente en contradicción con uno de sus grandes argumentos en contra del federalismo: la creación de lealtades enfrentadas a la que tanto había aludido en varias de sus obras, sin ir más lejos en *El derecho de la constitución*. Su valoración de conjunto del aporte sería muy

<sup>34</sup> Albert Venn Dicey, *How we Ought to Fell about the War*, Oxford, Oxford University Press, 1914.

<sup>35</sup> Dicey, citado en Héctor Domínguez Benito, *James Bryce y los fundamentos intelectuales del internacionalismo liberal (1864-1922)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2018, p. 446.

<sup>36</sup> William Wordsworth, *Tract on the Convention of Cintra with an Introduction by A.V. Dicey*, Londres, Humphrey Milford, 1915.

<sup>37</sup> Albert Venn Dicey y Robert S. Rait, *Thoughts on the Union between England & Scotland*, Londres, Macmillan, 1920, pp. 351-362.

sintomática: Dicey consideró *Thoughts on the Union between England and Scotland* (1920) «un trabajo pobre para agitar los últimos frutos de un árbol viejo»<sup>38</sup>.

El «profeta de lo obvio», como en alguna ocasión se llamó a sí mismo, murió el 7 de abril de 1922, melancólico y exhausto, apenas unas semanas después del fallecimiento de su amigo Bryce y de terminar la tercera edición de *Conflict of Laws*.

## II. UN MANIFIESTO INSTITUCIONAL: MANUALES PARA UNA NUEVA CIENCIA JURÍDICA EN LA DÉCADA DEL «GRAN RESURGIMIENTO»

En un elogio póstumo a su compañero Anson, Dicey ofrece una pequeña muestra de humildad bastante típica en él al autoexcluirse de la nómina de oxonienses de su generación que consagraron parte de su trabajo a desarrollar el género de los manuales jurídicos. Consideraba el jurista que en Oxford se había producido un «gran resurgimiento» del estudio jurídico, cuya influencia la atestiguaba la publicación de una serie de libros de hombres «que buscaban ampliar y mejorar la educación jurídica, tales como por ejemplo *Introduction to the History of the Law of Real Property* de Digby (1875); *Elements of Jurisprudence* de Holland (1880); o *The American Commonwealth* de Bryce (1888)»<sup>39</sup>. Aunque la obra de Bryce tuvo mucho tirón en Inglaterra y Estados Unidos hasta finales de los años 20<sup>40</sup>, y también cabría incluir en esta lista el algo más tardío aporte de Pollock<sup>41</sup>, es obvio que el punto culminante de este desarrollo manualístico fue, sin lugar a dudas, *El derecho de la constitución*, considerado de hecho como un «manifiesto» tras la obtención de la cátedra que otrora había ocupado Blackstone<sup>42</sup>. Y es que el nombramiento de Dicey como *Vinerian Professor of English Law* en 1882, seguido del de Pollock como *Corpus Professor of Jurisprudence* apenas unos meses después, generó unas expectativas que la prensa del momento expresaba de la siguiente forma:

<sup>38</sup> Robert S. Rait, *Memorials...*, op. cit. (n. 5), p. 207.

<sup>39</sup> Albert Venn Dicey, «Law Teaching, Oral and Written», en Herbert Hensley Henson (ed.), *A Memoir of The Right Honourable Sir William Anson*, Oxford, Clarendon Press, 1920, pp. 85.

<sup>40</sup> He dado cuenta de este y otros aspectos relativos a la publicación de *The American Commonwealth* en el estudio introductorio de James Bryce, *La República norteamericana* (trad. de Adolfo González-Posada y Adolfo Álvarez-Buylla), Pamplona, Analecta, 2017.

<sup>41</sup> Frederick Pollock, *A First Book of Jurisprudence for Students of the Common Law*, Londres y Nueva York, Macmillan, 1896.

<sup>42</sup> James Vernon, op. cit. (n. 10), 218.

«La Universidad de Oxford ha juntado ahora un círculo de jóvenes juristas muy distinguidos, que deberían causar una impresión considerable en los estudiantes de derecho de nuestros días. El Profesor Bryce, Miembro del Parlamento, es conocido desde hace tiempo por sus magistrales estudios en Derecho romano. Anunciamos el otro día el nombramiento de Albert Venn Dicey como *Vinerian Professor*, y esta semana se ha conocido que F. Pollock, otro instruido científico jurídico de vigorosa aptitud general –es un instruido spinozista, así como un instruido jurista– ha sido elegido *Corpus Professor de English Law*, cátedra en la que Blackstone fue el más famoso, así como su primer ocupante, y que recientemente ha sido hecha más ilustre por las impresionantes lecciones de Sir Henry Maine. Con estos tres hombres extremadamente capaces impartiendo lecciones en Derecho en Oxford, la *Oxford School of Law* debería ocupar un gran lugar en la historia del método jurídico»<sup>43</sup>.

Las expectativas de la prensa no resultaron demasiado exageradas. Junto con el propio Anson, Bryce, Holland o Pollock, Dicey lideró la consolidación de la nueva *Oxford Law School*, recientemente separada de la antigua *School of Law and Modern History*<sup>44</sup>, y dió el pistoletazo de salida a la renovación de los estudios de *Jurisprudence* en la Universidad. El objetivo de estos juristas era conseguir que los estudios jurídicos tuviesen una credibilidad académica más marcada en el amplio panorama de la comunidad intelectual victoriana<sup>45</sup>, lo que significaba entre otras cosas despojarse de «sus aspectos más románticos»<sup>46</sup>, y requería además revertir una tendencia estructural de las cátedras jurídicas inglesas: su degeneración en meras sinecuras<sup>47</sup>. El caso de la *Vinerian Professorship* era uno de los más escandalosos. Desde el establecimiento de la cátedra con Blackstone en 1758, su prestigio no había dejado de decaer. El antecesor de Dicey, sin ir más lejos, se caracterizaba por sus largas ausencias de Oxford<sup>48</sup>.

Revertir esa falta de actividad fue por tanto un objetivo fundamental de este grupo de académicos. En 1884 pusieron en marcha la *Law Quarterly Review*, que tendría a

<sup>43</sup> *The Spectator*, 3 de febrero de 1883, p. 139. Nótese la confusión del cronista entre el puesto de Pollock y el de Dicey.

<sup>44</sup> Barry Nicholas, «Jurisprudence», en Michael George Brock y Mark Curthoys (eds.), *The History of the University of Oxford: Nineteenth-Century Oxford Part 2*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 394; John W. F. Allison, *The English Historical Constitution: Continuity, Change and European Effects*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 12.

<sup>45</sup> K. J. M. Smith y J. P. S. McLaren, «History's Living Legacy: An Outline of 'Modern' Historiography of the Common Law», en Norman Doe y Russell Sandberg (eds.), *Law and History: Critical Concepts in Law, Volume I: Historiography*, Londres y Nueva York, Routledge, 2017, p. 111. Smith y McLaren subrayan el influjo de Henry Maine en este punto.

<sup>46</sup> Martin Loughlin, «Why the History of English Administrative Law is not Written», en David Dyzenhaus, Murray Hunt y Grant Huscroft (eds.), *A Simple Common Lawyer: Essays in Honour of Michael Taggart*, Oxford, Hart Publishing, 2009, p. 152.

<sup>47</sup> William Twining, *Blackstone's Tower: The English Law School*, Londres, Stevens and Sons, 1994, pp. 24-26.

<sup>48</sup> Richard A. Cosgrove, *The Rule...*, op. cit. (n. 5), p. 45.

Pollock al frente a lo largo de sus primeras tres décadas de vida<sup>49</sup>. Su objetivo fundamental era ofrecer una alternativa a las habituales revistas jurídicas del momento (como *Law Times* o *Law Journal*) que carecían de crítica alguna y se componían fundamentalmente de «editoriales sin firmar, cotilleos jurídicos, informes sobre casos y leyes, listas de libros jurídicos recién publicados, y artículos pidiendo esta o aquella reforma legal». Frente a este enfoque práctico, la *Law Quarterly Review* comenzó a ofrecer piezas sobre derecho romano, historia del derecho<sup>50</sup>, educación jurídica, conflictos de leyes o derecho internacional público. No es de extrañar que, además de las muchas muestras de alabanza que generó la nueva publicación, también surgieran críticas que entendían que la revista era «muy científica, sin duda, pero atrocemente aburrida»<sup>51</sup>. Esta no sería la única acusación de *scholarly overkill* que se vertiera sobre esta generación de juristas, a buen seguro consecuencia de su intento de dotar de un carácter más denso el acercamiento a objetos que hasta ese momento no se habían abordado desde una perspectiva disciplinar verdaderamente autoconsciente<sup>52</sup>.

La aparición de los manuales mencionados respondía a la misma causa que el surgimiento de la *Law Quarterly Review*: la falta de una salida natural en la literatura periódica había traído consigo que los autores creativos se refugiasen en la publicación de sus respectivos *Digests*, *Elements*, *Introductions* o *Principles*<sup>53</sup>. No obstante, la creación de tratados en forma de manuales no se explica solo por la falta de alternativas al género. Poder acercar las disciplinas «científicas» a los estudiantes era el gran propósito de estos juristas. Y si *El derecho de la constitución* fue el mayor exponente de este objetivo, también cabe mencionar que Dicey ya había lanzado un serio aviso en este sentido cuando en su lección inaugural de 1883 en el *All Souls College* ofreció su célebre conferencia «Can English Law Be Taught at the Universities?». En ella planteaba algunas claves importantes para justificar una enseñanza universitaria que prestara más atención a los principios jurídicos. Los grandes problemas que desconcertaban a los jueces ingleses, señalaba Dicey, eran problemas de principios, no los detalles. Y, aun siendo los detalles importantes, «el sistema exhaustivo de

<sup>49</sup> Patrick Polden, «The Legal Professions», en John Baker (ed.), *The Oxford...*, op. cit. (n. 26), pp. 1205-1206.

<sup>50</sup> Para la relación entre la *Law Quarterly Review* y la historia del derecho, José Antonio Escudero López, «La historiografía general del Derecho inglés», *Anuario de Historia del Derecho Español*, núm. 35, 1965, pp. 302-303.

<sup>51</sup> Neil Duxbury, *Frederick Pollock and the English Juristic Tradition*, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 309-322.

<sup>52</sup> Valga mencionar que una noticia del nombramiento de Dicey como *Vinerian Professor* decía así: «En nuestra opinión, Albert Dicey es hoy uno de los hombres más capaces; pero su habilidad es menos conocida de lo que debería ser para el público, debido a su tendencia abstracta. Esta tendencia, en cualquier caso, es justo lo que le adecuaba sumamente para una cátedra en derecho». *The Spectator*, 9 de diciembre de 1882, p. 1567.

<sup>53</sup> Alfred William Brian Simpson, «The Rise and Fall of the Legal Treatise: Legal Principles and the Forms of Legal Literature», *University of Chicago Law Review*, vol. 48, núm. 3, 1981, p. 662.

aprendizaje se ha convertido en una imposibilidad en el sentido más estricto; es una tradición del pasado. Ya no podéis aprender el derecho de la forma en la que Coke, o Holt, o Blackstone, o incluso Campbell lo aprendieron», dado que esto sería como «llevar la carga de Inglaterra en los barcos que abastecían el comercio británico en los días de la Reina Isabel, o incluso en el tiempo de Jorge III»<sup>54</sup>.

Escapar de la alargada sombra de Blackstone había sido uno de los principales objetivos de buena parte de los juristas británicos decimonónicos, ya desde los utilitaristas<sup>55</sup>. Para Dicey, la influencia ejercida por los *Commentaries* de su predecesor era muy significativa del precario estado de la enseñanza del derecho en aquel momento. Tal trabajo no era el que precisamente requerían los docentes del derecho, y sin embargo su preeminencia seguía siendo notable, hasta tal punto que podía ser considerado como el único libro jurídico canónico en la literatura inglesa. El balance que hacía Dicey de la obra de Blackstone en *El derecho de la constitución* iría más allá, señalando de manera explícita que los *Commentaries* no solo no respondían a una concepción moderna de algo parecido al derecho constitucional, sino que además su lenguaje confundía, cuando no engañaba directamente, a los lectores (pp. 87-89).

Era necesario, por lo tanto, construir un acercamiento moderno a la constitución, que justificara en sí mismo la escasamente institucionalizada enseñanza profesoral de una disciplina que, en ese momento, apenas podía considerarse como tal<sup>56</sup>. A menudo se destaca el hecho de que Dicey trata de desmarcarse en *El derecho de la constitución* de las aproximaciones históricas o filosóficas más propias de la época, pero tanto o más significativo es el pasaje en el que se dedica a discutir los argumentos que plantean que el derecho constitucional no es derecho en sí mismo, sino que forma parte de la parte de la ciencia jurídica relacionada con la moralidad y la historia, en línea con el derecho internacional, o el derecho comparado centrado en los aspectos periféricos de la *Jurisprudence* a la manera de Maine o Pollock. La pregunta retórica que da pie a Dicey para ofrecer su afirmación de la existencia de un derecho constitucional —«¿es posible que el llamado “derecho constitucional” sea en realidad un cruce entre la historia y la costumbre que no merezca propiamente el nombre de derecho [...]?» (p. 96) —, que conecta con la insinuación de Tocqueville de la inexistencia de la constitución inglesa,

<sup>54</sup> Albert Venn Dicey, *Can English Law Be Taught at Universities?*, Londres, Macmillan, 1883, p. 17.

<sup>55</sup> Sobre este punto, también prestando una atención particular a Dicey, ver David Lieberman, «Professing Law in the Shadow of the Commentaries», en Anthony Page y Wilfrid Prest (eds.), *Blackstone and His Critics*, Oxford, Hart Publishing, 2018, pp. 153-172.

<sup>56</sup> John W. F. Allison (ed.), *The Oxford Edition of Dicey, Volume I*, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. xxv.



supone un punto de partida muy hábil para cimentar un libro que en sí mismo es una respuesta.

Para este propósito, Dicey se basó en el éxito que habían tenido al otro lado del Atlántico libros publicados en forma de manuales extraídos directamente de las lecciones de Kent y Story. Al comienzo de *El derecho de la constitución*, Dicey se remitía a estos autores para definir un modelo de acercamiento muy difícil de igualar, dadas las diferencias formales de las constituciones inglesa y estadounidense. Mientras que los juristas que se acercaban a la constitución en Estados Unidos tenían un marco muy definido, por el contrario los ingleses se encontraban con la dificultad añadida de tener que construirlo. Pero lo que está claro es la influencia como punto de partida de ambos autores desde un principio —a lo que cabe añadir que Story también sería, posteriormente, muy influyente a la hora de confeccionar *Conflict of Laws*—. No en vano, en su lección inaugural Dicey ponía a los dos juristas como ejemplo ante sus alumnos por haber compaginado su visión profesoral y académica del derecho con la práctica jurídica al más alto nivel ocupando importantes magistraturas. El propósito del jurista era que los estudiantes encontrasen sentido al acercamiento académico al derecho, aparentemente desconectado de la realidad de los tribunales y despachos. La referencia a Estados Unidos, en ese sentido, era muy poderosa: «los ciudadanos de la Unión no son, ciertamente, ni pedantes ni teóricos [...] Los agudos juristas de Nueva York se reirían en vuestra cara si sugirieseis que no podría aprenderse nada de provecho de las lecciones del Profesor Dwight»<sup>57</sup>. Con más de una década de retraso, los métodos con los que Dicey había entrado en contacto en su viaje a Estados Unidos comenzaban a serle útiles para justificar su propio proyecto en Inglaterra, en el contexto de «americanomanía» que empezaba a desatarse en la isla británica<sup>58</sup>.

El propósito de dotar de una cultura jurídica mayor a los estudiantes no fue, finalmente, todo lo exitoso que se habían planteado los oxonienses en la década de 1880. En su segundo viaje a Estados Unidos, ya a final de siglo, Dicey echó la vista atrás para hacerse la misma pregunta que se había hecho en su lección inaugural, y concluyó que, a pesar de todo el esfuerzo que se había realizado para consolidar los estudios de *Jurisprudence* en la Universidad, el hecho de que los estudiantes necesitaran un período de prácticas («*reading in chambers*») y preparar un examen antes de poder acceder al *Bar* traía consigo que los estudiantes no se quedasen en

<sup>57</sup> Albert Venn Dicey, *Can English...*, op. cit. (n. 54), 28.

<sup>58</sup> A Dicey le llamaba particularmente la atención sobre el cambio de parecer de las clases altas en Inglaterra respecto del sistema político de Estados Unidos en los últimos años, entrando en los debates sobre los posibles trasplantes de instituciones estadounidenses en Inglaterra. Ver Albert Venn Dicey, «Americomania in English Politics», *The Nation*, 21 de enero de 1886.

Oxford profundizando en el conocimiento del derecho después de graduarse. Así las cosas, los estudiantes que normalmente tenían enfrente los juristas no eran «una clase de hombres a quienes pudiera darse una instrucción de posgrado seria»<sup>59</sup>. Dicey reivindicaba que la Universidad presionara para que aquellos estudiantes de posgrado que obtuviesen el *Bachelor of Civil Law* quedasen exentos del examen, pero parece que no tuvo demasiado éxito en sus demandas a juzgar por la valoración del asunto que hizo Bryce tras la despedida de Holland, apenas un año después de la de Dicey, mediante una nota muy significativa: «Tu *Valedictory* [lecture] fue muy interesante para mí en muchos aspectos, tanto a propósito del progreso del derecho internacional durante nuestros tiempos, como también en relación con Oxford y el progreso hecho hacia la consecución de una Facultad adecuada. Creo que podemos pensar –tú y Dicey, y hasta cierto punto yo– que hemos ofrecido una enseñanza del derecho del nivel y la calidad correctos, aunque no hubo apenas disposición por parte de la Universidad para que las materias debieran constituir un currículum jurídico formal. Pero Inglaterra es un país raro, y me temo que ni la Universidad ni el Gobierno aprecian lo que el derecho necesita como materia de primera magnitud, ni los servicios que rinden hombres como tú»<sup>60</sup>.

Si bien el objetivo de dotar de músculo intelectual a la enseñanza del derecho en Inglaterra terminó siendo un pequeño fracaso, al menos en lo que a los estudiantes se refiere, no obstante Dicey concluyó que de toda la oleada de manuales que había despertado esa institucionalización de los estudios jurídicos y del esfuerzo detrás de la consolidación de la Facultad quedaron, al menos, dos cosas importantes: por un lado, el derecho había conseguido interpelar a los «legos instruidos, a los caballeros pensadores y moralistas», que se habían comenzado a interesar por asuntos de especulación jurídica. El derecho se había convertido en un tema de discusión popular en la opinión pública ilustrada. Por otro lado, de la mano de esta creación de cierta industria en el debate académico jurídico, se había establecido una clase exclusivamente profesoral en el mundo del derecho, algo casi inexistente décadas atrás<sup>61</sup>. Aunque, sin duda alguna, algo tuvo que ver el devenir de las circunstancias políticas para que se diera semejante visibilidad al debate jurídico académico en el marco de la opinión pública. Este aspecto constituye el objeto del siguiente apartado.

<sup>59</sup> Albert Venn Dicey, «*The Teaching...*», op. cit. (n. 24), p. 439.

<sup>60</sup> Bryce, citado en William Searle Holdsworth, «Sir Thomas Erskine Holland (1835-1926)», *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 76, núm. 3, 1928, p. 233.

<sup>61</sup> Estas reflexiones las ofrecía Dicey en su lección de despedida como *Vinerian Professor*. Albert Venn Dicey, «Blackstone's Commentaries», *Cambridge Law Journal*, núm. 4, vol. 3, 1932 [1909], pp. 306-307.

### III. UN MANIFIESTO POLÍTICO: EL CONSTITUCIONALISMO DE UN IMPERIO ANTE LA ENCRUCIJADA FEDERAL

Hay una idea sobre el constitucionalismo inglés que aparece en multitud de lugares y que puede expresarse de muchas maneras. Por decirlo con la que me parece más elegante y precisa a la vez: «la constitución de Inglaterra no es una constitución escrita, pero sí es una constitución descrita. Hay un discurso de mediación que la representa, discurso cuya organización interna es, para quien lo escribe, tan absolutamente disponible como determinante resulta para la comprensión del objeto sobre el que recae»<sup>62</sup>. Está de más decir que *El derecho de la constitución* es un vivo ejemplo de esta importancia de la mediación. Pero como ocurre prácticamente con todas las obras que generan una cantidad de literatura secundaria inabarcable, aquí nos encontramos además con un tercer vértice que recompone de nuevo la disposición del objeto: el discurso de mediación que la lee. Y el discurso de mediación lector de esta obra ha resumido este libro en tres conceptos. En el imaginario de la dogmática jurídica, decir Albert Venn Dicey es decir «soberanía parlamentaria», «*rule of law*» y «convenciones de la constitución». El jurista consiguió lo que se proponía, dado que tanto en la primera lección como en las conclusiones incidía en el carácter básico de esas tres nociones como ideas fuerza. Pero esto seguramente ha hecho que quienes se acercan a esta obra presten una atención menor a un aspecto de la misma que apuntala en especial al primero de estos principios: la cuestión imperial, simbolizada en *El derecho de la constitución* por los pasajes dedicados a los cuerpos legislativos no soberanos y al federalismo<sup>63</sup>.

En el momento de redacción de *El derecho de la constitución*, el liberalismo en la metrópoli se encontraba dividido acerca de cómo afrontar el desafío que suponían las demandas de autogobierno de Irlanda<sup>64</sup>, y de hecho estaba a las puertas de una escisión de la que Dicey tomaría partido directamente: la que separó del Partido Liberal al nuevo Partido Unionista Liberal<sup>65</sup>. En 1887, Dicey escribiría al Editor del *Spectator* para acusar

<sup>62</sup> Jesús Vallejo Fernández de la Reguera, «Estudio preliminar: escritura, contexto y memoria de la Constitución de Almodóvar», en Duque de Almodóvar, *Constitución de Inglaterra*, Madrid, Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, pp. xlv-xlvi.

<sup>63</sup> Prueba de la importancia de esta cuestión es el hecho de que la sección del libro que recicla Dicey para publicar en el que iba a ser el primer número de la *Law Quarterly Review*, lanzada ese mismo año, es precisamente la de la relación entre la soberanía parlamentaria y el gobierno federal. Ver Albert Venn Dicey, «Federal Government», *Law Quarterly Review*, vol. 1, núm. 1, 1885, pp. 80-99.

<sup>64</sup> En términos generales, ver Duncan Bell, «The Victorian Idea of a Global State», en Duncan Bell (ed.), *Victorian Visions of Global Order: Empire and International Relations in Nineteenth-Century Political Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 159-185.

<sup>65</sup> Aunque el desencadenante inmediato de la escisión fue el compromiso de Gladstone con el *Home Rule* en 1886, se venía gestando una fuerte tensión entre un ala más radical y otra más *whig* del partido, que

a los liberales de haber convertido el federalismo en un dogma del partido «que todo liberal debe aceptar bajo pena de excomunión». Lo que sorprendía realmente al jurista era el cambio radical de opinión respecto de esta idea de organización del Estado que habían tenido sus antiguos compañeros en tan poco tiempo. Se preguntaba cómo era posible que un partido que en 1880 hubiera desarmado cualquier propuesta federalizante bajo la idea común de que la tendencia histórica se orientaba hacia la unidad, apenas unos años después las creyera beneficiosas<sup>66</sup>. Esta lectura retrospectiva de Dicey nos puede dar una idea de lo fulgurante que fue el ascenso de la tesis federal desde comienzos de la década<sup>67</sup>. Una de las explicaciones que se han dado a este fenómeno es que fue precisamente a partir de 1880 cuando se comenzó a vislumbrar de verdad el hecho de que la soberanía política había pasado de las manos de unos pocos gerifaltes políticos a un electorado mucho más amplio. Y en este panorama, los votos de los nacionalistas irlandeses se habían vuelto cruciales<sup>68</sup>, gracias entre otras cosas al liderazgo que imprimía al movimiento Charles Stewart Parnell<sup>69</sup>.

Hay cierta polémica en relación con los orígenes de la oposición de Dicey al nacionalismo irlandés, y hay quien atribuye que en su juventud no veía con malos ojos a los nacionalistas y a Parnell, en particular debido a su oposición a las medidas coercitivas impuestas por el gobierno británico en Irlanda, patente en algunos puntos en *El derecho de la constitución*. Lo que interesa a efectos de este estudio es que, cuando menos desde 1882, tanto el nacionalismo irlandés como la formulación del federalismo como solución recibieron una oposición frontal por parte de Dicey, convencido de las soluciones propuestas hasta el momento traerían recelos entre Inglaterra e Irlanda y debilitarían al todo el Reino Unido. Ya en 1882 afirmó en un artículo en la *Contemporary Review* que semejante modelo, «al socavar la soberanía parlamentaria, priva a las instituciones inglesas de su elasticidad, de su fuerza y de su vida; debilita al Ejecutivo, y disminuye el poder del país para resistir a los ataques extranjeros. La revolución a la que tienden estos cambios no ofrece expectativas de conciliación con Irlanda (...)»<sup>70</sup>.

---

sería la que terminara conformando en buena parte el Partido Unionista liberal. Gordon L. Goodman, «Liberal Unionism: The Revolt of the Whigs», *Victorian Studies*, vol. 3, núm. 2, 1959, pp. 173-189.

<sup>66</sup> «Professor Dicey on Unionist Delusions, III», *The Spectator*, 27 de agosto de 1887, pp. 1150-1152.

<sup>67</sup> Otra cosa bien distinta es que ya hubiera algunas incursiones intelectuales en el modelo federal a la luz del Imperio británico en las dos décadas anteriores, si bien no especialmente populares. Aportes como los del propio Freeman a propósito de contextos como el suizo generaron algo de debate en círculos determinados, aunque Freeman siempre se opuso a la causa de la federalización del Imperio, y la configuración del Dominio de Canadá como una federación desde 1867 también puso el foco en esta forma de gobierno. John Kendle, *Federal Britain: A History*, Londres, Routledge, 1997, pp. 38-40.

<sup>68</sup> Hugh Tulloch, «Changing British Attitudes towards the United States in the 1880s», *The Historical Journal*, núm. 20, vol. 4, 1977, p. 835.

<sup>69</sup> David Harkness, «Ireland», en Robin W. Pinks (ed.), *The Oxford History of the British Empire. Volume V: Historiography*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 119.

<sup>70</sup> Albert Venn Dicey en *Contemporary Review*, citado en John Kendle, *Ireland and the Federal Solution: The Debate over the United Kingdom Constitution, 1870-1921*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1989, p. 22. Esta temprana advertencia debería servirnos para desechar la insinuación de que fue el propio

Este temprano análisis adelantaba un hecho en el que sí que coinciden buena parte de los comentaristas: desde una perspectiva teórica, Dicey terminó convirtiéndose en el más destacado enemigo del federalismo en Inglaterra, cosa ya de por sí notable, habida cuenta que las filas del unionismo liberal estaban engrosadas fundamentalmente por académicos. Es muy interesante el hecho de que en este artículo de prensa Dicey apela a la idea de «elasticidad» como propiedad inherente al constitucionalismo inglés que sería arruinada por una hipotética reforma federal. Una idea muy parecida sería utilizada en *El derecho de la constitución*, valiéndose de la distinción entre «constituciones flexibles» y «constituciones rígidas», que supuestamente Bryce había acuñado en una «lección no publicada» de 1884 (p. 138)<sup>71</sup>. La apelación de Dicey a la elasticidad dos años antes nos indica, cuando menos, que la idea, siquiera no en su forma definitiva, ya circulaba en el ambiente oxoniense.

Su amigo Bryce, no obstante, no veía con malos ojos la salida federal, y de hecho terminó convirtiéndose en uno de los principales defensores académicos de la causa. De familia escocesa y nacido en Úlster, a diferencia de Dicey él sí había podido desarrollar una carrera política como Miembro del Parlamento, y formaba parte del ala del Partido Liberal más cercana a Gladstone, con quien llegaría a ocupar cargos en sucesivas legislaturas, entre otros precisamente como Jefe de Secretaría de Irlanda. En 1884, cuando Dicey preparaba *El derecho de la constitución*, Bryce participó en la creación de la *Imperial Federation League*, liderada por Lord Rosebery, y fue, de hecho, nombrado *Chairman* de la sección de Oxford del movimiento. En el Congreso sobre la Federación Imperial celebrado en Londres el 29 de julio de 1884 se acordó fundar una Liga «para asegurar la unidad permanente del Imperio», entendiendo que para la consecución de ese fin era imprescindible «la promoción de algún tipo de Federación»<sup>72</sup>. Esta idea no solamente se vio alimentada por cuestiones internas del Imperio británico, sino que la coyuntura internacional favorecía un discurso en estos términos. Así, en 1885 Bryce la enmarcaba dentro de una «oleada europea»<sup>73</sup>. Hasta su liquidación en

---

proceso de escritura de *El derecho de la constitución* lo que llevó a Dicey a formarse una opinión determinada sobre la cuestión, que encontramos por ejemplo en Christopher Harvie, *The Lights...*, op. cit. (n. 16), p. 226.

<sup>71</sup> Las lecciones dieron lugar a un pequeño ensayo, publicado de manera un tanto rocambolesca en 1901, que a su vez también se convertiría en célebre. La última de las múltiples ediciones en castellano es James Bryce, *Constituciones flexibles y constituciones rígidas*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015.

<sup>72</sup> Así lo enunciaba el Artículo 1 de sus Estatutos, contenido en la circular «Imperial Federation League: Information for the Use of Branches Issued by Authority of the General Committee», Londres, Imperial Federation League, 1884, pp. iii-iv.

<sup>73</sup> «[Los] hombres de Estado europeos consideran, desde hace algunos años, el federalismo y la autonomía local como el medio más conveniente para dejar una entera libertad al sentimiento de nacionalidad que puede existir en una parte de un imperio, o bien para permitir a tal o cual parte de este, que difiere de las otras regiones, tener las instituciones locales y las leyes especiales que necesita. He aquí la razón, o mejor, las dos razones, que han guiado a los estadistas tratándose de Finlandia y de sus relaciones con Rusia, de Hungría en sus relaciones con Austria, de Islandia en sus relaciones con Dinamarca, de Bulgaria en sus

1893, la Liga fue perdiendo fuelle, fundamentalmente por lo vagas e imprecisas que eran sus ideas de partida<sup>74</sup>. Pero en el período entre su fundación y 1887, año en el que promovieron la primera *Colonial Conference* –modelo de conferencias a las que, curiosamente, apelaba Dicey en su «Introducción» de 1915– fue un actor público a tener en cuenta.

Las elecciones de 1885, que dieron a Parnell la llave de gobierno, supusieron el desencadenante inmediato de la escisión de los liberales unionistas, que terminarían facilitando el gobierno de los conservadores liderados por Lord Salisbury un año después. Arthur Elliot, uno de los compañeros de Dicey en la escisión unionista, retrató ese momento en un artículo en su memoria describiendo «exaltantes tiempos de disputa política y de ruptura de un gran partido político», en los que «había una fuerte discusión entre ambos lados, y bastante violencia en el lenguaje, en la recriminación y en la invectiva personal entre los defensores de la Unión y del *Home Rule*»<sup>75</sup>. Llamó la atención de todos, afirmaba Elliot, el hecho de que el primer libro publicado por Dicey sobre la cuestión en 1886 tenía un tono relajado y conciliador, especialmente en comparación con el carácter del debate público en aquel momento. Esto dejaría pronto de ser así. Apenas cinco años después, el jurista haría balance del período señalando que «en 1886, el unionismo estaba oponiéndose verdaderamente a una innovación peligrosa. El conflicto entre unionistas y *home rulers* no suponía al principio más que un justo desacuerdo en relación con una cuestión política. Al menos aparentemente, no dependía de ninguna diferencia de creencias morales arraigada. Las cosas son bastante diferentes en 1890. Los medios por los que tanto los seguidores de Parnell como los gladstonianos buscan alcanzar sus fines son mucho más peligrosos que el fin que persiguen, por muy peligroso que sea este último [...] La causa del unionismo se ha convertido entonces en la causa de la justicia legal contra la causa de la violencia, la causa del constitucionalismo contra la causa de la revolución»<sup>76</sup>.

Ciertamente, hay un contraste en el tono muy evidente entre el Dicey más o menos conciliador de 1886, que trataba de rebatir uno a uno de una manera muy sistemática todos los argumentos esgrimidos por parte de los defensores de las distintas corrientes de *home rulers* y liberales gladstonianos en *England's Case against Home Rule*, y el

---

relaciones con Turquía, de Irlanda en sus relaciones con la Gran Bretaña». James Bryce, discurso pronunciado el 10 de febrero de 1885, en *Expressions of Opinion on Imperial Federation, by Public Men at Home and in the Colonies*, Londres, Imperial Federation League, 1885, pp. 5-6. En similares términos se expresaría en James Bryce, *La República...vol. II*, op. cit. (n. 40), 2017.

<sup>74</sup> Ver la panorámica aproximación de Michael David Burgess, «The Imperial Federation Movement in Great Britain, 1869-1893», Tesis doctoral, Universidad de Leicester, 1976.

<sup>75</sup> Robert S. Rait (ed.), op. cit. (n. 5), pp. 109-110.

<sup>76</sup> Albert Venn Dicey, *The Verdict: A Tract on the Political Significance of the Parnell Commission*, Londres, París y Melbourne, Cassell & Company, 1890, pp. 181-182.

Dicey que en 1915 reivindicaba taxativamente su derecho a utilizar la palabra *Englishmen* para referirse a los sujetos vinculados con la constitución británica. Precisamente por ello es muy pertinente acercarse a *El derecho de la constitución* teniendo en mente que un Dicey más o menos contenido estaba elaborando una dogmática constitucional nada ajena a los argumentos que estaban promoviendo antes y durante la redacción del libro los miembros de la *Imperial Federation League*.

Por su parte, Bryce permanecería del lado de Gladstone, liderando proyectos en sentido contrario como el *Handbook of Home Rule* (1887), libro colectivo escrito por políticos y opinadores públicos en el que, ya fuera explícita o implícitamente, buena parte de los autores se esforzaban en refutar lo expuesto por Dicey en *England's Case Against Home Rule*<sup>77</sup>. Un año después, publicó una obra que bien puede considerarse tanto hermana como enemiga de *El derecho de la constitución*, *The American Commonwealth*, en la que presentó el modelo federal estadounidense enfatizando las continuidades –y de esta forma las compatibilidades– con el sistema británico. Harvie ha enfocado la gran discrepancia entre estos autores desde un punto de vista bastante original, al que no le falta razón alguna: al final, todos salieron ganando. Los problemas políticos del momento pusieron en el mismo centro del debate público controversias de naturaleza constitucional<sup>78</sup>, y estos dos juristas estaban ahí para recoger los frutos de tal protagonismo. Bryce y Dicey, y en menor medida también Anson, que se había adscrito a las filas de los unionistas, dejaron de ser simples académicos y en poco tiempo pasaron a ser también «ideólogos». Con la victoria de Salisbury, la constitución se mantuvo intacta, de modo que el libro de Dicey no quedó obsoleto rápidamente, sino que pasó a ser una referencia obligada, tanto que incluso los *home rulers* lo citaban para defender algunas de sus tesis. Y Gladstone fue desalojado del poder, pero con la marcha de los unionistas fue capaz de mantener el control del partido, y a su vuelta al Gabinete en 1892 nombró Ministro a Bryce.

Seguramente en el hecho de que el problema se diluyera durante los años clave posteriores podemos encontrar una de las causas de que, en muchos aportes que se ocupan de valorar esta obra, la importancia que se le da a su vertiente política se tenga poco en cuenta. Pero es inevitable leer los pasajes en los que Dicey apela a la incompatibilidad entre federalismo y soberanía parlamentaria –«toda asamblea

---

<sup>77</sup> James Bryce (ed.), *Handbook of Home Rule: Being Articles on the Irish Question* (2ª ed.), Londres, Kegan Paul, Trench & Co., 1887. Por citar solamente unos casos, el propio Bryce respondía al artículo del *Spectator* en el que Dicey acusaba a los gladstonianos de incoherencia en comparación con su posición en 1880; Barry O'Brien titulaba su artículo «The 'Unionist' Case for Home Rule»; y Edward Lawrence Godkin comparaba los argumentos formulados por Dicey con los que despejaba Madison en «El federalista».

<sup>78</sup> Christopher Harvie, «Ideology and Home Rule: James Bryce, A.V. Dicey and Ireland, 1880-1887», *The English Historical Review*, vol. 91, núm. 359, 1976, p. 314.

legislativa existente bajo una constitución federal es meramente un cuerpo legislativo subordinado» (p. 171)– o a la incompatibilidad entre la flexibilidad constitucional y el federalismo –«la constitución [*federal*] debe ser un documento escrito y, a ser posible, un documento escrito cuyos términos no estén abiertos a confusión alguna» (p. 170)–, y no pensar en que su propósito último es advertir de lo inoportuno de los planteamientos federales en el contexto británico.

Si en 1882 Dicey ya había puesto de manifiesto su preocupación por el hecho de que la cuestión irlandesa amenazaba con socavar «la soberanía parlamentaria», no puede extrañar en modo alguno la centralidad concedida a esta noción. Muchos la han vinculado con Hobbes<sup>79</sup>, y a decir verdad en el ambiente del momento se había producido una especie de *revival* hobbessiano, muy relacionado con el recelo que la democracia despertaba entre personajes cercanos a Dicey como Henry Sumner Maine o James Fitzjames Stephen. En sus libros *Popular Government* y *Liberty, Equality, Fraternity*, respectivamente, los dos apóstoles se valían de una cita apócrifa del genial filósofo de Malmesbury, según la cual «la democracia es la libertad hecha añicos». Precisamente en las mismas coordenadas se puede entender no solo la animadversión de Dicey hacia el colectivismo, más o menos disimulada en *El derecho de la constitución*, sino especialmente sus reparos a todo tipo de experimentos en relación con la cuestión imperial en general o con las demandas de Irlanda en particular, no en vano también se ha situado a Dicey, Maine y Stephen –siendo estos últimos, además, miembros de la administración colonial– en las mismas coordenadas respecto de la cuestión imperial<sup>80</sup>. La unidad del Imperio era en sí misma un valor a proteger, entendiendo que la generación de poderes fragmentados era inconsistente con el legalismo de la tradición jurídica inglesa. A partir de estas premisas Dicey construiría su dogmática constitucional.

#### IV. UN MANIFIESTO DOGMÁTICO: EL «MODELO DICEYANO»

##### 1. *Soberanía parlamentaria, rule of law y convenciones de la constitución*

<sup>79</sup> David Dyzenhaus, «Austin, Hobbes, and Dicey», en Michael Freeman y Patricia Mindus (eds.), *The Legacy of John Austin's Jurisprudence*, Dordrecht, Springer, 2013, pp. 215-236; Martin Loughlin, *Sword & Scales: An Examination of the Relationship between Law & Politics*, Oxford, Hart Publishing, 2000, p. 136.

<sup>80</sup> Dylan Lino, «Albert Venn Dicey and the Constitutional Theory of Empire», *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 36, núm. 4, 2016, p. 761.



Tres nociones interconectadas entre sí componen la estructura constitucional de Dicey. La falta de límites al ejercicio de la soberanía legal por parte del Parlamento (soberanía parlamentaria) está íntimamente ligada con el sometimiento de todos los súbditos a la jurisdicción ordinaria (*rule of law*), y la práctica del ejercicio de esa soberanía parlamentaria se lleva a cabo en muchas ocasiones a través de principios políticos que no forman parte de la constitución en sentido estricto (convenciones de la constitución), pero de incumplirse traerían consigo, de manera indirecta, infracciones en el derecho ordinario de las que conocerían los tribunales.

La habilidad de Dicey a la hora de configurar la idea de soberanía parlamentaria reside en su presupuesto de separar el propio sistema parlamentario como fenómeno político de su existencia como un hecho de naturaleza jurídica. En este punto se produce, y esto ha sido glosado por muchísimos autores, la gran ruptura entre Dicey y Austin<sup>81</sup>. Este último había insistido en la relación entre los Miembros del Parlamento y los electores en términos de fideicomiso. Los Miembros de la Cámara de los Comunes, había señalado Austin, son meros depositarios del cuerpo por el que han sido elegidos y nombrados. Para Dicey esto no tiene nada que ver con el derecho, lo que le da pie a trazar la conocida distinción entre «soberanía jurídica» y «soberanía política». Puede ser que los electores conformen el cuerpo político soberano, pero el poder jurídicamente soberano lo encarna el Parlamento, dado que nadie acudiría a los Tribunales para alegar la voluntad del electorado. Su planteamiento se sustenta sobre la base de que no se está enunciando ningún tipo de deducción de carácter abstracto, sino que simplemente está presentando una consecuencia del funcionamiento del propio derecho inglés.

Este ejercicio de la soberanía jurídica supone, por decirlo con las palabras de Tocqueville, que el Parlamento sea «una cámara legislativa y una asamblea constituyente al mismo tiempo» (p. 135), dado que no puede ser limitado por *Acts of Parliament* previas teniendo la capacidad de promulgar *Acts of Parliament* nuevas que deroguen cualquier tipo de restricción. La *Septennial Act* de 1716 es citada en varias ocasiones por Dicey como el mayor ejemplo visto nunca del ejercicio de la soberanía parlamentaria. El Parlamento prorrogó su propia existencia legal por razones de conveniencia política, ignorando el período por el que había sido elegido por sus electores, lo que probaría la separación entre el verdadero ejercicio de la soberanía legal

---

<sup>81</sup> Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, «La soberanía en la doctrina británica (de Bracton a Dicey)», *Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho público e Historia constitucional*, núm. 1, 1998, p. 94.

por parte del Parlamento y la concepción del representante parlamentario como mero agente de los electores.

La soberanía jurídica del Parlamento, «la piedra angular del derecho de la constitución» (p. 124), se sustentaba en estrecha conexión con la idea de *rule of law*. Hacer compatibles ambos principios era de por sí audaz: en principio, parecería difícilmente compatible el poder ilimitado del Parlamento con un derecho jurisdiccional o *judge-made*<sup>82</sup>. Como advirtió el economista Heinz Arndt, el concepto de *rule of law* en el sentido en el que lo formula Dicey no lo inventa él, sino que lo toma de William Edward Hearn<sup>83</sup>, a quien alaba en el primer capítulo del libro, pero cuya aproximación desecha por considerarla filosófica en exceso. Tampoco está claro que podamos atribuir la paternidad del concepto como tal al irlandés afincado en Melbourne, dado que en el contexto iusprivatístico la construcción *rule of law* en el sentido más cercano a «regla de derecho» era bastante corriente: basta con ver muchas de las resoluciones comentadas en el Tratado de derecho de las partes de Dicey de 1870 para percatarse de que la locución no tenía nada de nuevo<sup>84</sup>. Pero Hearn hace una cosa importante para el *rule of law* diceyano, y es que le pone el apellido que servirá al jurista inglés para apuntalar su comparación: «ordinario»<sup>85</sup>.

Todo súbdito está sometido a la jurisdicción de los tribunales *ordinarios*, que conocerán de las infracciones del derecho *ordinario*. Esto apuntala la autoridad del Parlamento, que impone ese derecho a través de sus *Acts of Parliament*, a la vez que establece un principio de igualdad lo más alejado posible de las arbitrariedades que, a juicio de Dicey, caracterizaban el estatus de los ejecutivos en la Europa continental y particularmente en Francia.

---

<sup>82</sup> Tal contraste se subraya, por ejemplo, en Gustav Radbruch, *El espíritu del derecho inglés* (Trad. de Fernando Vela), Madrid, Revista de Occidente, 1958, pp. 46-47; en el mismo sentido y específicamente en relación con el modelo de Dicey, Pietro Costa, «Lo Stato di diritto: un'introduzione storica», en Pietro Costa y Danilo Zolo (eds.), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, 3ª ed., Milán, Feltrinelli, 2006 [2002], pp. 125-127.

<sup>83</sup> Heinz Wolfgang Arndt, «The Origins of Dicey's Concept of the 'Rule of Law'», *The Australian Law Journal*, núm. 31, 1957, pp. 117-123.

<sup>84</sup> O comentarios de Dicey mismo. Por ejemplo, sin salirnos del Prefacio: «la ventaja práctica de la disposición perseguida en este tratado es que permite al lector advertir de un vistazo cuál es la regla de derecho; al mismo tiempo que lo libera de la necesidad de recolectar el principio que busca a partir de las sentencias o leyes en las que se encarna». Traduzco aquí el «*rule of law*» por «regla de derecho» porque es el sentido en el que Dicey lo utiliza en este contexto, que poco tiene que ver con el sentido de *rule of law* como principio opuesto al derecho administrativo continental. Albert Venn Dicey, *A Treatise on the Rules...*, op. cit. (n. 21), p. iv.

<sup>85</sup> Señala Hearn, comentando la responsabilidad judicial en Estados Unidos, que «cuando se quiso que los jueces fueran independientes tanto del control legislativo como del ejecutivo, se consiguió dándoles un estado de pleno dominio de su cargo, sujetos al *ordinary rule of law*». William Edward Hearn, *The Government of England: Its Structure, and its Development*, Londres, Longmans, Green, Reader & Dyer, 1867, p. 87.

El *rule of law* se manifiesta de tres maneras concretas: por un lado, significa que nadie puede ser castigado salvo por la comisión de una infracción legal. Por otro lado, supone que nadie, incluso quienes ocupan cargos, se encuentra exento de responder por una infracción legal ante los tribunales ordinarios. Finalmente, trae consigo que la constitución inglesa se manifiesta a través de la protección de los derechos privados de los individuos, no a través de las normas que emanan de un código constitucional (pp. 216-218, 222)<sup>86</sup>.

Esta concepción contrastaba con el modelo del *droit administratif*, que Dicey condensó en cinco máximas. La primera es que el gobierno y sus servidores, como representantes de la nación, se encuentran protegidos por un cuerpo especial de derechos, privilegios o prerrogativas frente a los ciudadanos privados. La segunda es que, en virtud de la concepción francesa de la separación de poderes —«Montesquieu confundió los principios y la práctica de la constitución inglesa»—, el gobierno y sus servidores deben ser independientes respecto de la jurisdicción de los tribunales ordinarios mientras actúen en el ejercicio de sus funciones<sup>87</sup>. El tercer rasgo es que ese cuerpo especial de derechos se aplica por tribunales especiales o administrativos. El cuarto es que los conflictos de jurisdicción, esto es, si un caso se dirige en la jurisdicción ordinaria o administrativa, se decide por un Tribunal compuesto de personas que, «si no son realmente parte del poder ejecutivo, están influidas por simpatías hacia el mismo». Por último, el derecho francés reconoce una clase indefinida de «actos de Estado» que no entran dentro del control de ningún tribunal en materias de alta política, policía o seguridad pública (p. 210).

Las convenciones de la constitución son aquellas prácticas constitucionales que no pueden alegarse ante los tribunales, pero que, curiosamente, en ocasiones son tanto o más respetadas que las normas contenidas en *Acts of Parliament*<sup>88</sup>. El interrogante que Dicey plantea a lector es cuál es el fundamento de su aplicación, de dónde deriva su

<sup>86</sup> Para una síntesis de los tres planos del concepto de *rule of law* en Dicey y sus críticas, Manuel García-Pelayo, *Derecho constitucional comparado*, Madrid, Alianza, 1984, pp. 279-283. Para la comparación, tanto en parecidos como en diferencias, con los conceptos continentales que se emparentan habitualmente con la idea de *rule of law*, Rainer Grote, «Rule of Law, Rechtsstaat, y État de Droit», *Pensamiento constitucional*, núm. 8, 2002, pp. 127-176.

<sup>87</sup> Autores como Vile han matizado el rechazo de Dicey hacia la doctrina de la separación de poderes. Si bien el jurista la atacaba duramente, generalmente se ha convenido que el objeto de la crítica de Dicey era la lectura «francesa» de la misma, que reforzaba la independencia del ejecutivo. Sin embargo, bien puede decirse que, a su modo, en *El derecho de la constitución* propone su particular separación de poderes, en la que «la creación de las leyes y su ejecución eran dos funciones distintas y separadas, y quienes la ejecutaban debían estar subordinados a quienes la creaban». Maurice J.C. Vile, *Constitucionalismo y separación de poderes* (Trad. de Xohana Bastida Calvo), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007 [1967], p. 257.

<sup>88</sup> Véase una síntesis sobre este particular en Ignacio Fernández Sarasola, «La idea de la constitución “real” en Gran Bretaña», *Fundamentos: Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho público e Historia constitucional*, núm. 6, 2010, pp. 392-394.

fuerza coercitiva. Una vez creado el misterio, lo resuelve al final de la obra exponiendo que el incumplimiento de las convenciones constitucionales tarde o temprano dará lugar al incumplimiento de normas jurídicas, y por lo tanto a infracciones de la constitución. Si, por ejemplo, el Parlamento no se reúne anualmente, o si el Gabinete no dimite estando en minoría en el Parlamento, no podrían ser aprobadas ni la *Mutiny Act* y ni la mayor parte de las normas tributarias, lo que traería consigo la licencia de todo el Ejército –y, con ello, la imposibilidad de garantizar la ley y el orden– y la falta de capacidad para hacer frente a los gastos. O, formulado en sentido negativo, la imposibilidad de que los soldados y recaudadores siguiesen las órdenes de sus superiores a la hora de desempeñar su trabajo sin incurrir en infracciones legales.

Siendo las convenciones el apartado más accesorio de las tres ideas que sustentan *El derecho de la constitución*, Dicey es muy hábil exponiendo la paradoja al principio del libro y resolviéndola al final. Cuando el lector espera cierta matización en la estricta separación entre la soberanía jurídica y la soberanía política que el jurista ha exhibido a lo largo de todas las lecciones previas, Dicey va un paso más allá, y no solamente reafirma la dicotomía, sino que refuerza su tesis de que la soberanía política ejerce un papel subalterno respecto de la jurídica. No es casualidad que se haya advertido que buena parte de la novedad que supuso la obra de Dicey fue este énfasis en las convenciones, aspecto que, se llamara como se llamara (derecho no escrito, costumbres...), no había ocupado una posición tan central en los tratados de los juristas<sup>89</sup>.

Con estas tres ideas Dicey consagró su concepción dogmática de la constitución británica, tengamos esto en mente, «durante el presente año de gracia de 1885» (p. 91). «No tenemos dudas de que Dicey tocó la fibra sensible de sus contemporáneos», reconocen abiertamente críticos de la tradición inaugurada por el jurista inglés, «pero, haciéndolo, apeló a ideales y sentimientos sobre el gobierno que han trascendido el momento histórico que se preocupó en describir»<sup>90</sup>. Dicey cristalizó en su libro el ambiente del momento en el que lo escribió por primera vez y, aunque las ediciones continuaban publicándose, él se aisló progresivamente del mundo, y por ende también de los cambios que podían trastocar su modelo, como demuestra claramente la

---

<sup>89</sup> En particular, Dicey toma la idea de la noción de «constitución convencional o no escrita» de Freeman, pero haciendo énfasis en la distinción entre ambas cosas: podía haber convenciones de la constitución escritas; mientras que podía haber derecho en sentido estricto, respaldado judicialmente, que no estuviese escrito. Owen Hood Phillips, «Constitutional Conventions: Dicey's Predecessors», *The Modern Law Review*, vol. 29, núm. 2, 1966, pp. 145-146. Para una muestra relevante de la influencia de la idea de convenciones de la constitución diceyana en otros autores de renombre, ver la distinción entre *law* y *custom* en Abbott Lawrence Lowell, *The Government of England, Vol. I*, Nueva York, Macmillan, 1912, pp. 10-15.

<sup>90</sup> Ian Harden y Norman Lewis, *The Noble Lie: The British Constitution and the Rule of Law*, Londres, Hutchinson, 1986, p. 4.

Introducción de 1915. Cuestión distinta es que su construcción doctrinal terminara haciendo las veces de constitución escrita<sup>91</sup>, y así diera lugar a la consagración de un «modelo diceyano», o a la aparición, como decía William Robson con mucho humor durante una lección, del «fantasma de Dicey» que perseguía a los administrativistas británicos del siglo XX<sup>92</sup>. Los debates sobre la pervivencia y pertinencia de su modelo no hacen más que sucederse, hasta el punto de seguir siendo reivindicado ya entrado el siglo XXI<sup>93</sup>, o hasta el punto de utilizarlo como «contraejemplo» de la constitución «*multi-layered*» del Reino Unido en un marco tan improbable para Dicey como el de la Unión Europea<sup>94</sup>.

## 2. El modelo diceyano y sus influencias: Freeman y la polémica como premisa

En un momento no demasiado remoto para nosotros como 1999, se decía que los británicos tendrían que retroceder hasta Albert Venn Dicey para dar con el último jurista académico «cuya voz sobre cuestiones constitucionales fue considerada de autoridad». Ciertamente es, se aclaraba a continuación, que si Dicey consiguió semejante estima no fue por su originalidad como teórico del derecho o por la profundidad de sus enseñanzas, sino porque fue capaz de formular con brillantez la visión de lo que los victorianos entendían que era la constitución<sup>95</sup>. Es innegable que hubo un componente fundamental de oportunidad, en línea de lo que señalaba el propio Dicey en su carta a Anson citada al principio de este ensayo. La constitución inglesa «no estaba escrita» o, por decirlo en términos diceyanos, «es un ámbito del derecho que no ha sido aún reducido a un orden»

<sup>91</sup> John W. F. Allison, «The Westminster Parliament's Formal Sovereignty in Britain and Europe from a Historical Perspective», *Giornale de Storia Costituzionale*, vol. 34, núm. 2, 2017, p. 68.

<sup>92</sup> Lo hizo en una notable panorámica sobre la evolución del derecho administrativo durante la primera mitad del siglo XX, William A. Robson, «Administrative Law», en Morris Ginsberg (ed.), *Law and Opinion in England in the 20th Century*, Londres, Stevens and Sons, 1959, pp. 193-214. Ver también William A. Robson, *Justice and Administrative Law: A Study of the British Constitution*, 2ª ed., Londres, Stevens and Sons, 1947, pp. 26-29. David Sugarman y Gerry R. Rubin, «Towards a New History of Law and Material Society in England», en Norman Doe y Russell Sandberg (eds.), *Law and History...*, op. cit. (n. 45), pp. 325-326. Bien podría decirse que el fantasma de Dicey ha perseguido no solamente a los administrativistas, sino también a los historiadores del derecho, como se señala en Martin Loughlin, «Why the History...», op. cit. (n. 46), 151-177.

<sup>93</sup> Como se hace, por ejemplo, en Luc B. Tremblay, «Two Models of Constitutionalism and the Legitimacy of Law: Dicey or Marshall?», *Oxford University Commonwealth Law Journal*, núm. 6, 2006, pp. 77-101.

<sup>94</sup> Nicholas Bamforth y Peter Leyland, «Public Law in a Multi-Layered Constitution», en Nicholas Bamforth y Peter Leyland, (eds.), *Public Law in a Multi-Layered Constitution*, Oxford, Hart Publishing, 2003, pp. 1-25. Hay quien se toma la licencia de bromear a propósito de esta cuestión: si Dicey viera los manuales de hoy en día, que «exploran el impacto de las leyes “fundamentales”, concepciones cambiantes de la soberanía, *devolution* y Unión Europea y la práctica del derecho administrativo», a buen seguro se molestaría. Ian Ward, *Writing the Victorian Constitution*, Cham, Palgrave Macmillan, 2018, p. 190.

<sup>95</sup> Nevil Johnson, «Law, Convention, and Precedent in the British Constitution», en David Butler, Vernon Bogdanor y Robert Summers (eds.), *The Law, Politics, and the Constitution: Essays in Honour of Geoffrey Marshall*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 135.

(p. 21)<sup>96</sup>. Desde luego, una clave básica de *El derecho de la constitución* es que Dicey supo imprimir precisamente eso, un orden. Su disposición a la hora de exponer el derecho de la constitución fue tremendamente efectiva, y muchos manuales sucesivos de la materia en el Reino Unido siguieron construyéndose sobre su estructura organizativa, o al menos buena parte de ella<sup>97</sup>.

Pero sería injusto reducir el avance que supuso esta obra a un plano meramente organizativo. Pensemos en un agudo balance del texto que hace Stefan Collini: Dicey «alcanzó la improbable fusión de la interpretación *whig* de la historia, el análisis del derecho austiniano, y la concepción individualista del Estado, todo ello presentado como una conclusión desapasionada de ciencia jurídica académica»<sup>98</sup>. Esta valoración pone sobre la mesa otra de las principales características de esta obra, que es el hecho de que fue capaz de sintetizar de un modo aparentemente aséptico una serie de imaginarios decimonónicos cargados de contenido. Esto explica que muchos de sus críticos en las décadas siguientes lo acusaran de ser más prescriptivo que descriptivo, y sin duda también es importante. No obstante, también podríamos relativizarlo: la mera síntesis de elementos ideológicos de todo tipo bajo una apariencia científica o desapasionada, como advertía de manera muy aguda Raymond Aron, es prácticamente una seña de identidad del mundo intelectual británico<sup>99</sup>.

Lo que verdaderamente hace de *El derecho de la constitución* una obra de referencia es, a mi juicio, el hecho de que Dicey, como él mismo reconoce, aplica el método de Freeman de convertir todo objeto de estudio en un debate en el que el lector se sienta interpelado a estar de acuerdo o en desacuerdo con el autor. Si en sus primeros años de vida el libro sobrevivió entre otras cosas gracias al hecho de que Gladstone fue desalojado y no hubo cambios sustanciales en el modelo de constitución que lo dejaran obsoleto, a partir de la década de 1890 el libro sobrevivió porque lo hicieron grande sus críticos. Son los críticos de Dicey los que, utilizándolo como obra a la que interpelar,

<sup>96</sup> Sabino Cassese, *Derecho...*, op. cit. (n. 3), 156-157.

<sup>97</sup> W. John Morgan y Stephen Livingstone, «Introduction: Albert Venn Dicey, Lawyer, Academic and Public Intellectual», en W. John Morgan y Stephen Livingstone (eds.), *Law and Opinion in Twentieth Century Britain and Ireland*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, p. 2. Pensemos, por ejemplo, en el manual por excelencia de derecho constitucional que ha llegado hasta nuestros días, el originariamente *Constitutional Law* de Wade y Godfrey Phillips, hoy *Constitutional & Administrative Law* de Bradley, Edwing y Knight. Su esqueleto sigue ofreciendo un lugar central en las fuentes del derecho constitucional a la supremacía parlamentaria y al *rule of law*, y durante buena parte del siglo XX prácticamente se limitaba a las tres nociones fundamentales de Dicey. Emlyn Capel Stewart Wade y Anthony W. Bradley, *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution*, 7ª ed., Londres, Longmans, Green and Co., 1966 [1ª ed. 1931]; Anthony W. Bradley, Keith D. Edwin y Christopher J.S. Knight, *Constitutional and Administrative Law*, 16ª ed., Harlow, Pearson, 2015 [1ª ed. 1931].

<sup>98</sup> Stefan Collini, citado en Anthony Brundage y Richard A. Cosgrove, *The Great Tradition: Constitutional History and National Identity in Britain and the United States*, Stanford, Stanford University Press, 2007, p. 23.

<sup>99</sup> Raymond Aron, *The Opium of the Intellectuals* (Trad. de Terence Kilmartin), Nueva York, W.W. Norton & Company, 1962.

ayudaron más que nadie a consagrar un «modelo diceyano». El tono polémico del jurista introdujo en el mundo de los engorrosos tratados del siglo XIX inglés un estilo muy deudor de los científicos sociales<sup>100</sup>: comenzar a exponer un tema a partir de una paradoja que necesita resolución; construir la investigación a partir de unas pocas ideas-fuerza muy concretas que puedan ser fácilmente asimiladas por la audiencia e incluso popularizadas; plantear un método verdaderamente comparado que no se limite a confrontar normas, sino que emplee recurrentemente elementos históricos o algunas de las toscas concepciones sociológicas propias del momento... Estas son algunas de las características que, revestidas de un barniz de asepsia jurídica necesario para encontrar su propio hueco en el prácticamente huérfano constitucionalismo académico de su generación, condujeron a Dicey a ser el autor más interpelado acerca de la constitución inglesa hasta hoy, fijando «una imagen jurídica aún beligerante de la singularidad inglesa»<sup>101</sup>. Y este tono beligerante lo tomó de Freeman.

El maestro de Dicey fue, efectivamente, un autor muy polémico. Procedente del mundo de la filología clásica, importó el método comparado a la historiografía política y constitucional<sup>102</sup>, campo en el que fueron célebres sus controversias con otros historiadores como Freund y Round sobre los fundamentos de la identidad nacional inglesa<sup>103</sup>. La obra de Freeman se apoyaba sobre un marcado determinismo racial, algo nada heterodoxo teniendo en cuenta el cajón de sastre que suponían las teorías políticas del imperio que predominaban en el ambiente intelectual del momento, que abarcaban desde concepciones evolutivas de las sociedades hasta ideas de misión civilizatoria de todo tipo<sup>104</sup>. En el centro de la idea de progreso freemaniana se situaba la superioridad histórica de la raza «germánica», en constante tensión –y este punto es muy útil para Dicey<sup>105</sup>– con la tradición «francesa» o latina<sup>106</sup>. Fue la herencia teutónica de los ingleses la que, desde su perspectiva, inauguraría la soberanía parlamentaria:

<sup>100</sup> Serena Sileoni, «Il pensiero costituzionale di A.V. Dicey. L'ispirazione storica e politologica», *Giornale di Storia costituzionale*, núm. 13, 2007, pp. 79-85.

<sup>101</sup> Bartolomé Clavero Salvador, «Estudio introductorio», en Jean Louis De Lolme, *Constitución de Inglaterra*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 43n.

<sup>102</sup> Héctor Domínguez Benito, «Frederick Pollock...», op. cit. (n. 4), pp. 92-93.

<sup>103</sup> Richard A. Cosgrove, «A Usable Past: History and the Politics of National Identity in Late Victorian England», *Parliamentary History*, vol. 27, núm. 1, 2008, pp. 30-42.

<sup>104</sup> Es lo que recientemente se ha denominado, con bastante acierto, «la extraña convergencia entre Freeman y Froude», en referencia al éxito de Greater Britain and Greater Greece y Oceana respectivamente. Ver Amanda Behm, *Imperial History and the Global Politics of Exclusion, Britain 1880-1940*, Londres, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 61-97.

<sup>105</sup> Aunque su obra y la literatura a la que dio lugar su obra pareciese indicar lo contrario, Dicey no era ajeno a la tradición culturalista promovida por autores como Freeman. La paradoja se detecta, por ejemplo, en Mark S. Weiner, «Imagining the Rule of Law in Nineteenth-Century Britain: Liberal Society and the Dialectic of the Clan», *Erasmus Law Review*, vol. 6, 2013, p. 161.

<sup>106</sup> Theodore Koditschek, «A Liberal Descent? E.A. Freeman's Invention of Racial Traditions», en G. Alex Bremner y Jonathan Conlin (eds.), *Making History: Edward Augustus Freeman and Victorian Cultural Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 199.

«desde que los primeros pobladores teutónicos atracaron en sus puertos, Inglaterra nunca ha conocido una total y completa sumisión a la voluntad de una sola persona. Siempre ha habido asambleas [...] capaces de controlar los caprichos de los tiranos y de hablar, con más o menos justicia, en nombre de la nación»<sup>107</sup>. Aunque hay aspectos de fondo en los planteamientos de Freeman que Dicey no suscribiría en absoluto, como el ávido interés del primero por el modelo federal, el énfasis en la utilización de recursos como la tensión entre dos polos para alimentar la controversia académica desde luego es una herencia freemaniana<sup>108</sup>, que Dicey deja entrever cuando afirma que «el mayor mérito de Freeman es su capacidad sin igual para convertir todo asunto a debate en un problema claro. Desafía a sus lectores a posicionarse a favor o en contra. Si uno se posiciona en contra, debe mostrar una buena causa para tomar semejante posición, y así puede aprender tanto del desacuerdo racional como de un hipotético asentimiento incondicional respecto de la visión del autor» (p. 90).

A primera vista, por ejemplo, uno puede llegar a creer que el carácter «analítico» de Dicey rompe con rasgos como la visión progresiva de la historia, no solamente por el hecho de que señale explícitamente que nos va a ofrecer una visión ajena a toda filosofía de la historia, sino especialmente por la insistencia en el apartado del *rule of law* en el hecho de que, durante el siglo XVI y buena parte del XVII, Francia y Gran Bretaña se caracterizaban por los mismos rasgos<sup>109</sup>. Los modelos de *rule of law* y *droit administratif* propios de 1885 que nos presenta Dicey servirían así para negar una comprensión evolutiva de los fenómenos históricos. Pero la forma de salvar esa aparente paradoja lo delata: «en Inglaterra, el intento de conformar una administración central fuerte por parte de la Corona durante los siglos XVI y XVII, aunque fue exitosa por algún tiempo, porque confluyó con algunas de las necesidades de aquella época, en el fondo resultaba contradictoria con las maneras y tradiciones del país» (p. 263). Esta apelación a las *moeurs*, rayando prácticamente la clásica idea del «progreso regresivo» que él mismo parecía criticar, aleja a Dicey de su propósito de desmarcarse, entre otros, de

<sup>107</sup> Edward Augustus Freeman, *Historical Essays*, Londres, Macmillan, 1875 [1871], p. 42.

<sup>108</sup> Esto se intuye muy bien en Hugh Tulloch, «A.V. Dicey and the Irish Question, 1870-1922», *The Irish Jurist*, vol. 15, núm. 1, 1980, p. 145.

<sup>109</sup> Para Holdsworth, esta sería la mayor cualidad del libro desde un punto de vista iushistórico: el hecho de que fue capaz de hacer que los estudiantes ingleses se dieran cuenta de que, de no haber sido por la abolición de la Cámara Estrellada en 1641, Inglaterra podría haber desarrollado un sistema de derecho administrativo en términos similares a los continentales. William Searle Holdsworth, *The Historians of Anglo-American Law*, Union, The Lawbook Exchange, pp. 92-93. La aparente paradoja de que incluso un *whig* como Dicey pusiera tanto énfasis en esa circunstancia no hace sino prevenirnos de aportes que, proyectando hacia atrás sus ideas o las ideas decimonónicas en general, sitúan el origen de la relación entre la soberanía parlamentaria y el *rule of law* en un punto tan remoto como el siglo XIII y trazan una línea continua al menos hasta 1885. En este mismo sentido, ver Bartolomé Clavero Salvador, *Happy Constitution. Cultura y lengua constitucionales*, Madrid, Trotta, 1997, p. 191.



Freeman<sup>110</sup>. Y no olvidemos que, al abrir la sección dedicada al *rule of law*, Suiza era el caso que utilizaba para concluir, con Tocqueville, que «Inglaterra parece ser mucho más republicana que la República helvética. Las principales diferencias se encuentran en las instituciones de los dos países, y especialmente en sus costumbres (*moeurs*)» (p. 192), y a ningún observador se le escapará, tanto menos al propio Dicey, que Tocqueville no habla de *costumbres* en términos estrictamente jurídicos<sup>111</sup>. A su vez, por otro lado, los pormenores de la derogación de las proclamaciones se despejan simplemente mediante una «probable» remisión a su «inconsistencia con el tenor general del derecho inglés» (p. 113).

Estas pinceladas culturalistas nos advierten de que Dicey no era ajeno a lógicas apriorísticas al abordar las diferencias entre los sistemas continentales y el sistema inglés. Le eran útiles en la medida en que ayudaban a dar forma a ese método polémico que había decidido tomar prestado de Freeman. Y esto tiene una consecuencia importante: Dicey era muy consciente del carácter *deformativo* que esto conllevaba. No hace falta acercarse a demasiadas obras de la literatura secundaria generada a propósito del jurista inglés para darse cuenta de que buena parte de los comentaristas de su obra coinciden en señalar unas u otras omisiones aparentemente deliberadas que, analizadas en su conjunto, certifican que no se produjeron por casualidad.

### 3. *El cherry picking casuístico de Dicey*

El carácter virtuoso del derecho inglés en la obra de Dicey se cimentaba sobre determinadas premisas: la inexistencia de equivalente alguno a un derecho administrativo que, de producirse, amenazaría la igualdad de todos los súbditos; la existencia de una serie de garantías fundamentales tanto para los ciudadanos como para los extranjeros en territorio británico que despejaban cualquier sospecha de

---

<sup>110</sup> Es inevitable remitirnos en este punto a *Growth of the English Constitution*, la obra de Freeman de la que Dicey toma la idea de «crecimiento de la constitución», muy importante para Dicey. La diferencia entre Inglaterra y Francia, señalaba Freeman, «no se ha debido a una falta de grandes hombres o de propósitos nobles por parte de nuestros vecinos continentales. En parte, podemos creer que se ha debido a diferencias en el carácter innato de las dos naciones, y en parte por diferencias en el curso seguido por sus historias. En Francia los Reyes borraron del mapa todo rastro de las antiguas instituciones libres y establecieron un mero despotismo de la Corona». Edward Augustus Freeman, *The Growth of the English Constitution from the Earliest Times*, Londres, Macmillan, 1872, pp. 64-65. Sobre la noción de «carácter» y su importancia en la comparación entre Inglaterra y Francia en la generación de Dicey, subrayando en particular la influencia de Freeman, ver Héctor Domínguez Benito, *James Bryce...*, op. cit. (n. 35), pp. 67-179.

<sup>111</sup> Sobre los distintos fenómenos que daban forma a las *moeurs* en Tocqueville, James Ceaser, «Alexis de Tocqueville on Political Science, Political Culture, and the Role of the Intellectual», *American Political Science Review*, vol. 79, núm. 3, 1985, pp. 656-672.

arbitrariedad y, en definitiva, un clima general de *laissez faire* que solo podía ser limitado por la aplicación del derecho ordinario entre los ciudadanos privados. Como ya se ha señalado al mencionar la influencia del método austiniano y su formación como tratadista en cuestiones iusprivatísticas, cada principio enunciado por Dicey en *El derecho de la constitución* remitía a ejemplos, esta vez abstractos o reales, que servían para facilitar su asimilación por parte de estudiantes o lectores.

Muchos son los autores que se han percatado no solamente de lo selectivo que era Dicey escogiendo los casos que utilizaba como ejemplos, sino también de que a su vez dentro de los propios casos que escogía era selectivo a la hora de contar los hechos que le interesaban y omitir los hechos que podrían poner en cuestión la efectividad del ejemplo. Abordemos algunas de estas omisiones.

Un punto muy delicado en *El derecho de la constitución*, porque en sí mismo pone en jaque a la idea de soberanía parlamentaria, es la posibilidad del Parlamento de «legalizar la ilegalidad» de forma retroactiva mediante *Acts of Indemnity* complementarias a las normas de suspensión de las *Habeas Corpus Acts*. Dicey presenta la naturaleza de las *Acts of Indemnity*, normas que liberan de su responsabilidad a quienes han infringido la ley, como «el mayor ejemplo de la soberanía parlamentaria». Pero omite convenientemente el hecho de que esta posibilidad desmorona por completo la consistencia del vínculo entre soberanía parlamentaria y *rule of law*. En palabras de Michael Lobban, en este extremo Dicey pretendía explicar «la cuadratura del círculo»<sup>112</sup>, dado que es evidente que estas herramientas conferían al ejecutivo apoyado por la mayoría parlamentaria de poderes arbitrarios. El jurista sale del paso de la siguiente manera: «es sin duda un ejercicio arbitrario del poder soberano, pero donde el soberano legal es una asamblea parlamentaria incluso los actos de Estado asumen la forma de legislación ordinaria, y este hecho en sí mismo mantiene, en un grado no pequeño, la supremacía de la ley tanto real como aparente» (p. 244)<sup>113</sup>. El ejemplo que utiliza para minimizar la importancia de las *Acts of Indemnity* inglesas es muy significativo. Estas se caracterizan, nos dice Dicey, por su «carácter moderado» en comparación, sin ir más lejos, con la que promulgó el legislativo de Jamaica tras la rebelión de la Bahía Morant. En 1865, el Gobernador Eyre había liderado unas represalias absolutamente desproporcionadas como consecuencia de un levantamiento, ejecutando a centenares de personas, y el propio Dicey se había

<sup>112</sup> Michael Lobban, «Habeas Corpus: From England to Empire», *International Journal of Law in Context*, núm. 7, vol. 2, 2011, p. 268.

<sup>113</sup> A mi juicio este extremo invalida, o al menos limita enormemente, cierta lectura de la idea de *rule of law* como «derecho de libertades» en el sentido de «rights» y no de «laws». La concepción de la primacía del derecho ordinario de Dicey comprende también la suspensión de las *Habeas Corpus Acts* y las *Acts of Indemnity*, «laws» difícilmente reconciliables con la idea de derecho como libertad personal.

movilizado en su juventud contra la impunidad que suponía la ley de indemnidad posterior a la represión, integrando el denominado *Jamaica Committee*. Era buen conocedor, por tanto, de los detalles del caso. Además de celebrar la moderación de las *Indemnity Acts* inglesas apelando a este caso, Dicey señalaba muy convenientemente el pleito *Phillips v. Eyre* (1869-1870) como ejemplo de que incluso los oficiales del Ejército podían ser procesados en Gran Bretaña gracias a la sujeción de estos al derecho ordinario. Lo que no mencionó es que el Gobernador Eyre salió airoso del procedimiento en la metrópoli<sup>114</sup>, y que lo hizo por una razón que ponía en duda el carácter subalterno de los legislativos de las colonias en tanto que «cuerpos legislativos no soberanos»: este caso fue el que inauguró la doctrina de la doble accionabilidad en derecho internacional privado. El propio Dicey se encargó años más tarde de contárnoslo en *Conflict of Laws*<sup>115</sup>.

Pensemos también en el caso de Wolfe Tone. Para el jurista, ningún ejemplo podría «ilustrar mejor la noble energía con la que los jueces han mantenido el mandato del derecho ordinario, incluso en períodos de violencia revolucionaria» (p. 277). Theobald Wolfe Tone era un rebelde irlandés que había sido capturado cooperando con el Ejército francés en una invasión a Irlanda. Llevado a juicio ante un tribunal de guerra, fue condenado a la horca. La mañana en que iba a llevarse a cabo la ejecución, se emitió un *writ* de *habeas corpus* ante la *Irish King's Bench* con el fundamento de que Wolfe Tone no era militar, y por tanto los oficiales que conocieron de su caso no tenían capacidad para juzgarlo. «Si tenemos en cuenta que Wolfe Tone admitió su culpa, que el Tribunal estaba repleto de jueces que detestaban a los rebeldes, y que Irlanda estaba inmersa en una crisis revolucionaria, debe admitirse que no puede encontrarse una afirmación más espléndida de la supremacía del derecho que la efectuada entonces por la *Irish Bench*» (p. 278). Sin embargo, como apunta John Allison, el alguacil que llevaba el *writ* del tribunal para prevenir la ejecución de Wolfe Tone encontró un sinfín de dificultades por parte de los militares que lo custodiaban para poder entregar la orden en los barracones militares y llevarse al rebelde. Cuando por fin lo consiguió, tras volver con órdenes judiciales para llevarse también a los oficiales en custodia, Wolfe Tone ya había intentado suicidarse, para evitar el escarnio de ser paseado por las calles antes

---

<sup>114</sup> Ver Peter North, «Private International Law in Twentieth-century England», en Jack Beatson y Reinhard Zimmermann (eds.), *Jurists Uprooted: German-speaking Émigré Lawyers in Twentieth-century Britain*, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 488. Sobre el caso jamaicano en particular, y sobre las contradicciones del liberalismo mediovictoriano para afrontar el asunto en general, ver Rande W. Kostal, *A Jurisprudence of Power: Victorian Empire and the Rule of Law*, Oxford, Oxford University Press, 2008.

<sup>115</sup> Albert Venn Dicey y John Bassett Moore, *A Digest of the Law of England with Reference to the Conflict of Laws with Notes of American Cases*, Londres, Stevens and Sons, 1896, pp. 659 y ss.

de la ejecución, y murió una semana después<sup>116</sup>. Dicey no hace mención alguna a estos extremos, que harían dudar a cualquier estudiante o lector de la pertinencia de este ejemplo como corolario de la legalidad.

También hay quien, al margen de casos concretos, ha negado la mayor respecto de la supuesta inexistencia de un derecho administrativo en Inglaterra en el momento en el que Dicey escribe *El derecho de la constitución*, incidiendo en el hecho de que ya existía un amplio cuerpo de normas y jurisdicciones no ordinarias o administrativas en la Gran Bretaña decimonónica. El caso más claro quizá sea el de Harry William Arthurs, que ofreció, precisamente en el centenario del lanzamiento del libro de Dicey, una interesante panorámica del crisol de sistemas de arbitraje, comisiones reguladoras, cuerpos de inspectores y, desde mediados de siglo, legislación por parte de las instituciones británicas que no podía ser etiquetada de forma distinta a «derecho administrativo»<sup>117</sup>.

Del mismo modo, ya desde las décadas siguientes de la publicación del libro los publicistas británicos se dedicaron a desgranar las simplificaciones que el jurista había cometido para reforzar las diferencias entre los dos modelos matizando que los sistemas continentales no se caracterizaban por una desprotección del ciudadano ordinario en comparación con los oficiales públicos tan exagerada como planteaba Dicey: en primer lugar, se aduce que sí existían inmunidades para servidores públicos en el sistema británico, que en algunos casos ofrecían una protección mayor que la de los países continentales<sup>118</sup>. En segundo lugar, se advertía que Dicey incurría en una aporía cuando vinculaba el *rule of law* con la igualdad entre servidores públicos y el resto de ciudadanos: siendo responsables por actos en los que siguieran órdenes de buena fe, los propios servidores públicos en Inglaterra estaban especialmente desprotegidos frente a su empleador, la Corona<sup>119</sup>.

---

<sup>116</sup> John W. F. Allison, *The English...*, op. cit. (n. 44), pp. 160-161. Allison volvería sobre este caso años después en su edición de *El derecho de la constitución*, haciendo una lectura muy pertinente de la inclusión de este caso como corolario del *rule of law* en las lecciones de Dicey. La lectura de Allison es muy concordante con las premisas de las que he partido: conociendo los datos, estaba simplificando el caso lo máximo posible, obviando los detalles que molestaban, para contar una historia que impresionase a los estudiantes y la pudiesen recordar, quedándose con una enseñanza muy concreta. John W. F. Allison (ed.), *The Oxford... Volume I*, op. cit. (n. 56), p. xl.

<sup>117</sup> Harry William Arthurs, *'Without the Law': Administrative Justice and Legal Pluralism in Nineteenth-Century England*, Toronto, University of Toronto Press, 1985; y más sucintamente en Harry William Arthurs, «Special Courts, Special Law: Legal Pluralism in Nineteenth Century England», en Norman Doe y Russell Sandberg (eds.), *Law and History: Critical Concepts in Law, Volume II: Public Law*, Londres, Routledge, 2017, pp. 295-324.

<sup>118</sup> Carleton Kemp Allen, *Law and Orders*, Londres, Stevens and Sons, 1945, p. 267.

<sup>119</sup> John Hartman Morgan, «Remedies Against the Crown», en Gleeson E. Robinson, *Public Authorities and Legal Liability*, Londres, University of London Press, 1925, pp. xlix y ss. En la situación privilegiada de la Corona insistiría Laski: ver Harold Laski, «Le règne de la loi en Angleterre», *Annuaire de l'Institut international de droit public*, vol. 1, 1930, p. 713.

En relación con del modelo francés o continental, hay una crítica tanto o más paralela a propósito de las omisiones de Dicey, fundamentalmente a propósito de un hecho indubitado<sup>120</sup>: la utilización de fuentes que sabía desfasadas para ofrecer una visión caricaturizada del *droit administratif*. El recurso a Alexis de Tocqueville, que escribió décadas antes del advenimiento de la Tercera República<sup>121</sup>, convertía en central la cuestión de los mecanismos de autorización para juzgar a los empleados públicos, despejando su abolición en 1870 de la siguiente forma: «es una conjetura plausible pensar que la abolición del Artículo 75 fue promulgada de forma rápida y tolerada fácilmente porque efectuaba un cambio mucho más importante en apariencia que en la realidad» (p. 209). Ford es seguramente quien haya valorado este subterfugio de la manera más explícita, al asegurar que el jurista sabía a ciencia cierta que en Francia se había establecido la igualdad jurídica bajo la Tercera República, y que utilizó a propósito fuentes desfasadas<sup>122</sup>, aspecto que prueba el hecho de que en ediciones posteriores se viera forzado a admitir, por ejemplo, que los materiales de Vivien que había utilizado se remontaban a 1853 (p. 347n). Del mismo modo, autores como Sieghart o Hayek pusieron el foco en el hecho de que Dicey había perfilado el modelo continental sin hacer especial referencia al caso de los tribunales administrativos germánicos, y considerando que «dichos tribunales habían sido organizados desde su creación como cuerpo judicial independiente con el propósito de asegurar ese imperio de la ley que Dicey estaba tan ansioso de preservar»<sup>123</sup>. Por otro lado, la afirmación de los distintos niveles de protección frente a los daños cometidos sobre ciudadanos ordinarios en Francia y en Inglaterra a través de la insistencia en el caso de Voltaire (pp. 90, 113-115) también ha sido cuestionada, teniendo en cuenta algo que Dicey no menciona: que Voltaire ofreció «una visión idealizada que negaba los defectos del gobierno y la sociedad ingleses», entre otras cosas por su interés en agradar a sus anfitriones ingleses y dar a conocer su trabajo entre la audiencia británica<sup>124</sup>.

Un jurista canadiense vinculado a la *Imperial Federation League* como Augustus Lefroy llamaría la atención sobre la conveniente ausencia del caso del Dominio de

<sup>120</sup> O más bien casi indubitado, pues en sentido contrario y defendiendo las actualizaciones de Dicey y la «justicia» de su visión del sistema francés, puede encontrarse Frederick Henry Lawson, «Dicey...I», op. cit. (n. 6), pp. 109-126; Frederick Henry Lawson, «Dicey Revisited II», *Political Studies*, vol. 7, núm. 3, 1959, pp. 207-221.

<sup>121</sup> Sobre la influencia de Tocqueville en Dicey en términos generales, Augustin Simard, «Tocqueville, Dicey et le problème du droit administratif», *The Tocqueville Review*, vol. XXXVIII, núm. 2, 2017, pp. 271-297.

<sup>122</sup> Ford, op. cit. (n. 5), 141-142. Ver también Marta Lorente Sariñena, «De la trascendencia constitucional de un mecanismo institucional: la autorización para procesar a los funcionarios públicos», en VV.AA., *Derecho, historia y universidades: estudios dedicados a Mariano Peset*, Valencia, Universidad de Valencia, 2007, pp. 122-127.

<sup>123</sup> Friedrich August von Hayek, *Los fundamentos de la libertad* (Trad. de José Vicente Torrente), 7ª ed., 2006 [1959], p. 280.

<sup>124</sup> John W.F. Allison, «History in the Law of the Constitution», *Journal of Legal History*, vol. 28, núm. 3, 2007, p. 276.

Canadá dentro del análisis de Dicey sobre los sistemas federales. Lefroy afirmaba la importancia del caso canadiense como experimento de combinación entre el sistema parlamentario con gobierno de Gabinete y el modelo federal<sup>125</sup>. Esto pondría en evidencia, además, la asociación necesaria entre gobierno federal y constitución rígida que había dado por sentada Dicey<sup>126</sup>.

Las convenciones de la constitución tampoco se librarían de la crítica a la falacia de la evidencia selectiva. Jennings pondría de manifiesto que era relativamente fácil encontrar convenciones tan obedecidas como los ejemplos expuestos por Dicey cuyo incumplimiento no supondría necesariamente una infracción del derecho. Más bien al contrario, estimaba, «el argumento de Dicey se aplica solamente a aquellas convenciones que determinan las relaciones entre el Gabinete y la Cámara de los Comunes, comparativamente pocas aunque importantes»<sup>127</sup>. La clave está, señala Jennings, en que Dicey cree que el derecho se impone cuando se incumple una convención, mientras que en la mayor parte de los casos las convenciones están relacionadas con la actividad del Gobierno, y el Gobierno en sí mismo no es objeto de demanda en los tribunales, si acaso lo son personas o grupos de personas<sup>128</sup>.

En definitiva, tanto a través de sus afirmaciones como de sus omisiones Dicey participó de forma central en la reproducción de una convicción que fue capaz de seguir siendo debatida por las generaciones posteriores: la de la hipotética superioridad y autosuficiencia del derecho inglés en comparación con el continental<sup>129</sup>. Tendría grandes seguidores como Lord Hewart<sup>130</sup>, o como el propio Hayek<sup>131</sup>, y tendría también

---

<sup>125</sup> Augustus Henry Frazer Lefroy, *The British versus the American System of National Government*, Toronto, Williamson & Co., 1891, pp. 8-9.

<sup>126</sup> Es más, en uno de los mejores aportes en castellano sobre el Imperio británico, Manuel García-Pelayo presentaría la adquisición de personalidad internacional por parte de los Dominios como un ejemplo claro de convenciones constitucionales a la manera diceyana. Manuel García-Pelayo, «El Imperio británico» [1945], en Manuel García-Pelayo, *Obras completas, vol. I*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 82.

<sup>127</sup> William Ivor Jennings, *The Law and the Constitution* (5ª ed.), Londres, University of London Press, 1960 [1933], pp. 129-130.

<sup>128</sup> Ibid., 131. Geoffrey Marshall y Graeme C. Moode llevarían más allá la crítica, dando por sentado que, en realidad, la falta de observancia de una convención constitucional no suponía una subsiguiente infracción jurídica, sino que más bien podría plantearse al revés: seguramente la falta de observancia de una convención, de ser tolerada, terminará trayendo consigo un cambio en el derecho, o incluso en toda la estructura constitucional. Geoffrey Marshall y Graeme C. Moode, *Some Problems of the Constitution*, Londres, Hutchinson, 1959, p. 41.

<sup>129</sup> Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, 7ª ed., Oxford, Oxford University Press, 1964 [1927], pp. 604-605.

<sup>130</sup> Su invectiva más dura contra el desarrollo de la burocracia, profundamente deudora del marco analítico Dicey («afortunadamente no hay una denominación en inglés para el “derecho administrativo”»), es Lord Hewart, *The New Despotism*, Londres, Ernest Benn, 1929; ver también una síntesis diceyana Lord Hewart, «The English Constitution», en *Essays and Observations*, Londres, Cassell & Company, 1930, pp. 196-199.

<sup>131</sup> Friedrich August von Hayek, *Camino de servidumbre* (Trad. de J. Vergara Doncel), Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1946, pp. 75-90. Sobre Dicey, Hayek, y el protagonismo para ambos autores de una poco realista separación estricta entre derecho y administración, William Burnett Harvey, «The Rule of Law in Historical Perspective», *Michigan Law Review*, vol. 59, 1961, pp. 491-493.

una incidencia notoria en la política práctica, especialmente en la polémica suscitada alrededor del *Committee on Ministers' Powers* (1929-1932)<sup>132</sup>. En palabras de Felix Frankfurter, «las sentencias, los discursos en la Cámara de los Comunes y las cartas al director en *The Times* reflejaron y perpetuaron las confusiones y la miopía de Dicey»<sup>133</sup>. Pero, sobre todo, el jurista inglés tendría también grandes críticos que se remitían a su modelo para comentarlo y ofrecer puntos de vista divergentes, participando también, a su modo, de la fijación del imaginario sobre su obra<sup>134</sup>: baste pensar en académicos vinculados a la *London School of Economics* como Ivor Jennings, William Robson o Harold Laski, representantes del giro que supuso el denominado «momento 1900» en lo relativo al derecho público en Inglaterra<sup>135</sup>. Esta institución surgió en el seno de las clases de economía de la Sociedad Fabiana, es decir, los herederos intelectuales de Green, que había muerto en 1882. Pensemos en lo que afirmaba Dicey de este a su muerte. Recordando sus años de juventud junto a su fallecido amigo, señalaba: «en un tiempo en el que pensábamos lo que uno podría denominar política romántica, él se mantuvo señalándonos constantemente el mal del pauperismo. Supongo que tanto sus simpatías como su poder de imaginación le llevaron a darse cuenta mucho más claramente que a muchos de nosotros de los sufrimientos reales de los pobres»<sup>136</sup>. Semejantes palabras con muy ilustrativas de la ajenidad con la que Dicey veía la cuestión social. Hasta la década de 1880, la cultura política victoriana era la que era: una amalgama de confusiones entre las nuevas ideas científicas y un romanticismo lleno de mitos que trataba de llenar de alguna forma el vacío que había dejado la secularización. Era Charles Darwin y Walter Scott. Apenas había espacio para la reflexión sobre el pauperismo o la cuestión social en los círculos académicos, y no fue hasta la década siguiente cuando entre los grupos ilustrados, entre los personajes

<sup>132</sup> El Comité, que reunía a juristas, políticos y miembros de la administración, se reunió para abordar bajo premisas muy diceyanas la cuestión de si las «libertades tradicionales» del pueblo británico estaban en peligro debido a la adquisición de funciones legislativas y judiciales por parte del ejecutivo, tal y como denunciaban autores como el propio Lord Hewart, que en ese momento era *Lord Chief Justice*. Para una aproximación a sus debates, con especial atención a la influencia de Dicey en los mismos, ver William A. Robson, *Justice...*, op. cit. (n. 92), pp. 314-376.

<sup>133</sup> Felix Frankfurter, «Foreword», *The Yale Law Journal*, vol. 47, núm. 4, 1938, pp. 517-518.

<sup>134</sup> En palabras de Lawson, algunos lo utilizaban como una Biblia; otros como un hombre de paja. Frederick Henry Lawson, «Dicey...I», op. cit. (n. 6), p. 109.

<sup>135</sup> Aurélie Duffy-Meunier, «Un programme de la London School of Economics: La critique du Droit constitutionnel de Dicey», en Olivier Jouanjan y Élisabeth Zoller (eds.), *Le «moment 1900»: Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux États-Unis*, París, Éditions Panthéon-Assas, 2015, pp. 151-194. A propósito de la crítica de Laski en particular, sobradamente expuesta en nuestra tradición historiográfica, ver Bartolomé Clavero Salvador, «Tutela administrativa o diálogos con Tocqueville», *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, núm. 24, 2005, pp. 457-462; o más recientemente Antonio Manuel Luque Reina, «Rule of law a debate: Laski vs. Dicey», *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, núm. 33, 2016, pp. 193-209.

<sup>136</sup> Dicey, citado en Colin Tyler, *The Liberal Socialism of Thomas Hill Green: Civil Society, Capitalism and the State*, Exeter, Imprint Academic, 2012, p. 66.

políticamente influyentes, comenzó a mostrarse un interés verdaderamente estimable hacia este tipo de asuntos.

A pesar de que la movilización obrera ya estaba llamando a la puerta cuando se escribe *El derecho de la constitución*, el inmenso desarrollo de las tareas de gobierno y el incremento de la complejidad en la burocracia en el futuro no era algo que Dicey pudiera o quisiera prever al redactar el libro, y como tal lo expresó de forma muy clara al comienzo del mismo. Recordemos: la función del jurista era conocer el derecho de Inglaterra en 1885. Por el contrario, los publicistas que comenzaron a congregarse en torno a los fabianos en la década de 1890 propugnaban entre otras cosas la función de «servicio público del Estado», y por tanto la imposibilidad de aislar los aspectos políticos o económicos de los meramente jurídicos. Para los fabianos y las primeras generaciones de intelectuales ligados a la *London School of Economics* los fenómenos de naturaleza jurídica se enmarcaban dentro del contexto general de las ciencias sociales<sup>137</sup>. Se estimaba que, tratando de ofrecer una visión del derecho de la constitución impermeable a otros órdenes, Dicey estaba incurriendo también en la creación de ficciones que él mismo había denunciado: sin ir más lejos, un Estado moderno no podía identificarse simplemente con el «*King in Parliament*».

William Ivor Jennings, uno de los representantes más significativos de este tipo de críticas, resumiría todo este estado de cosas de manera muy clara: «el Estado ejerce nuevas y más amplias funciones que requieren de una técnica de gobierno diferente de la adecuada a las condiciones del siglo XIX. La destrucción del *laissez-faire* no implica la destrucción de los métodos empleados por la administración del derecho privado y administrativo, porque las viejas funciones permanecen, y nada sugiere que los métodos utilizados para su ejecución sean esencialmente erróneos. Sin embargo, estos métodos no son apropiados para los seguros sociales, la planificación, la provisión de alojamiento y otras funciones del siglo XX»<sup>138</sup>. De esta forma, por ejemplo, se aducía que el planteamiento diceyano del *rule of law* debía leerse en el marco del contexto «defensivo» en el que se encontraba el ala *whig* del Partido Liberal, y que Dicey haría más explícito en escritos posteriores. El jurista afirmaba un principio constitucional que para él y para muchos de su generación «*debería ser un principio político*» (énfasis del propio Jennings). En este sentido en particular, el *rule of law* suponía, fundamentalmente, que las autoridades públicas no debían tener amplios poderes: «es

<sup>137</sup> Sabino Cassese, *Derecho...*, op. cit. (n. 3), p. 66.

<sup>138</sup> William Ivor Jennings, *The British Constitution* (3ª ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1950 [1941], p. 135.



decir, que el colectivismo que había inoculado las políticas de todos los gobiernos desde Disraeli era un principio no deseable»<sup>139</sup>.

Esa identificación entre el rechazo a la concentración de poder por parte de las autoridades públicas y las nociones diceyanas incurre en el error de imputar a estas ideas el contenido que Dicey iría desarrollando posteriormente. Loughlin ha apuntado con razón que Dicey no era tan pesimista como otros eminentes victorianos, comparándolo por ejemplo con Bagehot<sup>140</sup>. El pesimismo del jurista y el rechazo al colectivismo reciben una expresión explícita en sus escritos sobre la relación entre el derecho y la opinión pública de 1905 y la Introducción de 1915, pero no hay referencias especialmente relevantes sobre este fenómeno cuando concibe *El derecho de la constitución*<sup>141</sup>. La Introducción de 1915 se cierra precisamente reivindicando las reservas de Bagehot ante los problemas que podría traer consigo la ampliación del sufragio, pero es evidente que la concepción del entramado conceptual de Dicey acerca de la constitución se construye más mirando hacia Irlanda que mirando hacia la cuestión social<sup>142</sup>. Precisamente por ello es conveniente acercarse de manera separada a las adendas que Dicey iría incorporando a su trabajo, especialmente las fundamentales: su nueva versión de «La naturaleza del rule of law» en 1908 y su mencionado ensayo introductorio de 1915.

## V. LAS ENMIENDAS DE «EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN»

### 1. *El rule of law comparado con el droit administratif*

El notable impacto de *El derecho de la constitución* traspasó rápidamente fronteras. No había pasado una década desde la publicación de la primera edición del libro cuando Frank Goodnow construyó su obra sobre derecho administrativo comparado tratando de

<sup>139</sup> William Ivor Jennings, *The Law...*, op. cit. (n. 127), pp. 305-317.

<sup>140</sup> Martin Loughlin, *Public Law and Political Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 143. Este trabajo es particularmente útil para tener una visión de conjunto del modelo diceyano y su contraste con el modelo funcionalista.

<sup>141</sup> El propio Jennings matizaría su visión más adelante: Dicey no estaba ofreciendo una visión deliberadamente partidista en 1885, sino que no podía evitar acercarse a la constitución abstrayéndose de sus principios *whigs*. William Ivor Jennings, «In Praise of Dicey, 1885-1935», *Public Administration*, vol. 13, núm. 2, 1935, p. 128.

<sup>142</sup> Algo que Jennings, a pesar de todo, también tenía presente. Ver Aurélie Duffy-Meunier, «Un programme...», op. cit. (n. 135), 156.

desenredar la «idea injustificada», procedente de Dicey, según la cual no había una regulación equivalente al *droit administratif* en los países anglosajones<sup>143</sup>. En 1902 apareció la traducción francesa de *El derecho de la constitución*, que se valía de la quinta edición del original en inglés. Aun aceptando las premisas fundamentales de Dicey, el prologuista Alexandre Ribot señalaría que «Dicey está obligado a admitir que la aplicación del principio de responsabilidad de los funcionarios públicos ante los tribunales ordinarios hace que la ejecución de ciertas leyes sea casi imposible»<sup>144</sup>. Por su parte Gaston Jèze, uno de los traductores, iría bastante más lejos, señalando que Dicey había exagerado enormemente la irresponsabilidad de los funcionarios franceses y la incompetencia de los tribunales judiciales en materia de procedimientos relativos al Estado<sup>145</sup>.

Sin duda alguna el goteo de comentarios críticos de este tipo se había producido desde mucho antes, dado que Dicey se vio obligado a publicar en la *Law Quarterly Review* una actualización de su perspectiva sobre el «*droit administratif* moderno» en 1901<sup>146</sup>. En este artículo se contenían algunas de las matizaciones y líneas de argumentación que se verían plasmadas en el célebre capítulo duodécimo de la edición de 1908, desarrollo de la Lección V de 1885, «La naturaleza del *rule of law*». El cambio en la propia concepción del título procedía del paso de Lecciones a Capítulos en la tercera edición de 1889, que simbolizaba también un cambio en la forma de presentar el artículo. En las primeras dos ediciones el *droit administratif* era poco más que un modelo instrumental a través del que entender mejor, por contraste, el *rule of law*. El paso a capítulos otorga al *droit administratif* una entidad más marcada. Tras las críticas recibidas Dicey matiza su posición de fondo, pero sin abandonarla. Siendo cierto que podía vislumbrarse un gradual proceso de –por decirlo con la terminología diceyana– «jurisdiccionalización» del derecho administrativo a lo largo del siglo XIX en Francia, que justificó una división en fases en las que terminaría profundizando en el capítulo, el jurista se reafirmaba no obstante en su calificación del *droit administratif* como constructo absolutamente extraño al derecho inglés. Lo curioso es que reforzaba su argumentación con recursos ajenos al debate de naturaleza estrictamente jurídico que en apariencia debía caracterizar su acercamiento: los nuevos aportes tenían más

<sup>143</sup> Frank Johnson Goodnow, *Comparative Administrative Law: An Analysis of the Administrative Systems National and Local of the United States, England, France and Germany, Volume I: Organization*, Nueva York, G.P. Putnam's Sons, 1893, pp. 6-7.

<sup>144</sup> Alexandre-Félix-Joseph Ribot, «Préface», en Albert Venn Dicey, *Introduction a l'étude du droit constitutionnel* (Trad. de André Batut y Gaston Jèze), París, V. Giard & E. Brière, 1902, p. xviii.

<sup>145</sup> Gaston Jèze, citado en Sabino Cassese, *Derecho...*, op. cit. (n. 3), pp. 57-58.

<sup>146</sup> Albert Venn Dicey, «Droit Administratif in Modern French Law», *Law Quarterly Review*, vol. 17, 1901, pp. 302-318.

Tocqueville aún y más analogía histórica entre la Francia decimonónica y la Inglaterra de los siglos XVI y XVII aún.

En 1908 se incorpora una nota al pie muy reveladora, que sirve a Dicey para tratar de despejar las críticas sobre los usos de fuentes desfasadas y, fundamentalmente, del propio Tocqueville. Cuando apela a la falta de conocimiento por parte de Tocqueville de las nociones más básicas de derecho administrativo para justificar su propio desconocimiento, pasaje intacto desde 1885, Dicey introduce una matización que también va en su propio descargo: la falta de conocimiento de Tocqueville «es explicable, por no decir justificable. En 1831, Tocqueville era un joven de no más de veintiséis años de edad. En esa fecha ya podían encontrarse libros sobre el *droit administratif* escritos para cumplir con las necesidades de los juristas. Pero no existía aún el *corpus* de interesante literatura constitucional representada por los escritos de Laferrière, Hauriou, Duguit, Jèze, o Berthélemy que ahora esclarece la teoría y traza la historia de la más particular y curiosa rama del derecho francés» (nota 6, p. 343). Todos ellos aparecen citados, entre otros, en la (para los estándares de la época) abrumadora primera nota al pie del capítulo de 1908 (nota 1, p. 341), mucho más elaborada que la ofrecida en la edición anterior gracias a la publicación de nuevas obras de Berthélemy, Chardon, Duguit, Jèze y Teissier en el ínterin. El cruce de ambas notas es inequívoco: Dicey en 1885, como Tocqueville en 1831, no había contado con las fuentes adecuadas para acercarse al problema. Pero, con todo, a pesar de la excusa el jurista se reafirmaba respecto de la validez de las tesis de ambos, dado que desbrozando el artículo de 1901 y el capítulo de 1908 de los elementos históricos que pretenden mostrar lo mucho que Dicey había leído sobre la formación del *droit administratif* desde su primera incursión en el mismo como objeto de estudio, bien podemos concluir que las matizaciones que ofrece en la séptima edición apenas cambian nada respecto del punto de partida que supuso la Lección V de 1885: las afirmaciones categóricas, los planteamientos deudores de la vocación polémica de Dicey, continúan. Permanecen también intactas las referencias a la ajenidad conceptual y material del derecho administrativo para el derecho inglés (pp. 342-343).

Lo que cambia es el énfasis de Dicey en que «un estudiante inglés nunca entenderá esta rama del derecho francés a menos que tenga la vista puesta en su vertiente histórica» (p. 344), dado que una visión presentista podría dar lugar a creer, erróneamente a juicio del jurista, que entre ambos sistemas hay pocas diferencias. Nos encontramos aquí con dos elementos interconectados que merece la pena resaltar. En primer lugar, Dicey pone el acento en algo que había tratado de evitar –ya hemos visto que en buena medida infructuosamente– en 1885, renunciando al elemento distintivo de

su primera concepción de la obra: conocer el derecho del momento. En segundo lugar, no es muy arriesgado conjeturar que esta afirmación de la inconmensurabilidad entre los dos sistemas seguía estando muy presente porque era imprescindible mantenerla viva para poder asegurar la propia supervivencia de la publicación. Esto es, la polémica entre ambos sistemas era demasiado central dentro de la concepción de *El derecho de la constitución* como para dejarla caer en las ediciones posteriores.

El recorrido histórico del *droit administratif* que se introduce en 1908 desarrolla y perfecciona una división cronológica que Dicey había esbozado inicialmente con ocasión de su artículo sobre Francia en 1901: el período de elaboración secreta (1800-1818); el período de divulgación (1818-1860) y el período de organización (1860-1900)<sup>147</sup>. La gran novedad en este nuevo desarrollo, como ya se ha adelantado, es que Dicey complementa su construcción un tanto endeble basada en Tocqueville... con más Tocqueville. A las reflexiones propias de *La democracia en América*, propias de la juventud del francés, Dicey sumó las de *El Antiguo régimen y la Revolución*, «el más poderoso y maduro de sus trabajos» (p. 361). Dicey sabía que la apelación tocquevilleana a la continuidad entre el Antiguo régimen y la administración napoleónica era exagerada, y hasta cierto punto miope al no intuir la ulterior jurisdiccionalización, y él mismo lo reconoció al valorar la obra (p. 385). De nuevo, se cubría de las críticas sobre *El derecho de la constitución* utilizando a Tocqueville como parapeto: él tampoco había dado cuenta de esa jurisdiccionalización en 1885. Pero al igual que en la cuestión de las fuentes, Dicey no negaba la mayor. Más bien al contrario. La tesis de *El Antiguo régimen y la Revolución* le servía para reforzar sus modelos: que las lógicas administrativas en Francia hubiesen permanecido inalteradas con el Estado posrevolucionario era una imagen muy poderosa a la hora de plasmar la comparativa con Inglaterra, que a juicio del jurista había despejado de su sistema jurídico todo rasgo premoderno con la abolición de la Cámara Estrellada y la consolidación de la aplicación del derecho ordinario<sup>148</sup>.

Un balance de los méritos y los problemas del *rule of law* cierra la comparativa. Con el desarrollo de las funciones del Estado en esas dos décadas tan particulares, Dicey se vería obligado a admitir cierto proceso de cambio, pero no identificaba una verdadera convergencia con el derecho administrativo<sup>149</sup>. Es más, en un artículo dedicado a este

---

<sup>147</sup> Ibid, pp. 310-311.

<sup>148</sup> Véase la representativa cita de Tocqueville en la nota al pie número 11: «El principio de que en el caso de que se trate un contrato formal y regular entre un particular y el Estado, le corresponde al Estado juzgar la causa [...] era considerado tan sagrado por un administrador del Antiguo régimen como lo podría ser en nuestros días por el personaje que más se le parece, el Prefecto» (p. 346n).

<sup>149</sup> Lo afirma de manera muy clara cuando sostiene, en relación con la concesión de cierta autoridad judicial a algunos oficiales, que «es posible ver una ligera aproximación al derecho administrativo. Pero las

particular ya en 1915, aun admitiendo que la legislación del momento había dado considerables pasos hacia una autoridad judicial o cuasi-judicial por parte del Gobierno, sin embargo seguía reconociendo que el hecho de que los tribunales ordinarios pudieran ocuparse de cualquier infracción legal cometida por un servidor público preservaba el *rule of law*, y por tanto se mantenía la oposición con el modelo de *droit administratif*<sup>150</sup>.

## 2. La Introducción de 1915

Hay un toque paradójico en la obra de Dicey, de la que se percatará especialmente todo lector de la Introducción de la última edición de *El derecho de la constitución* publicada en vida de su autor<sup>151</sup>. El jurista enunció principios que, tomados seguramente de manera un tanto acrítica, serían básicos para la doctrina del constitucionalismo democrático, pero él en sí mismo era la prueba viviente de que el advenimiento de la democracia en el siglo XX no fue «el inevitable resultado de un cambio constitucional gradual»<sup>152</sup>. Más bien al contrario, Dicey no veía con buenos ojos el devenir político que había traído consigo la sociedad de masas. La Introducción, un ensayo de más de noventa páginas en su edición original escrito para no tener que retocar de nuevo el cuerpo de la obra, es quizá el documento más representativo de este recelo, llevado a su máxima expresión tras la aprobación de la *Parliament Act* en 1911 y la *Home Rule Act* de 1914, aunque por el poco tiempo transcurrido no entra a valorar esta última.

La Introducción se divide en dos partes. Por un lado, el ya retirado Profesor ofrece una suerte de «balance de daños» en relación con el devenir de las tres nociones básicas de *El derecho de la constitución*; por otro, expone su visión sobre los «nuevos debates constitucionales» surgidos en los treinta años transcurridos desde el lanzamiento de la primera edición del libro. Dicey identifica en este último grupo cuatro debates importantes. No obstante, hay uno de ellos que bien podría formar parte del primer bloque de nociones básicas en 1885: el relativo al federalismo.

---

innovaciones, tal como son, han sido sugeridas simplemente por consideraciones de conveniencia práctica, y no revelan la más mínima intención por parte de los estadistas ingleses de modificar los principios esenciales del derecho inglés. No existe en Inglaterra un verdadero derecho administrativo» (p. 383).

<sup>150</sup> Albert Venn Dicey, «The Development of Administrative Law in England», *The Law Quarterly Review*, vol. 31, 1915, pp. 148-153.

<sup>151</sup> Para una síntesis de los planteamientos de Dicey en los temas que se abordan en la Introducción, ver John F. McEldowney, «Dicey in Historical Perspective – A Review Essay», en Patrick McAuslan y John F. McEldowney (eds.), *Law, Legitimacy and the Constitution: Essays Marking the Centenary of Dicey's Law of the Constitution*, Londres, Sweet & Maxwell, 1985, pp. 39-61.

<sup>152</sup> Ian Christopher Fletcher, «'This Zeal for Lawlessness': A.V. Dicey, The Law of the Constitution, and the Challenge of Popular Politics, 1885-1915», *Parliamentary History*, vol. 16, núm. 3, 1997, pp. 328-329.

Ya se ha insistido aquí en el hecho de que la oposición a las tesis promotoras del federalismo en el seno del Imperio británico es un elemento básico para este tratado. El modelo de Estado diceyano es un modelo de Estado unitario, cuya soberanía parlamentaria esté localizada en el *King in Parliament*, de forma que se eviten posibles interferencias con otro tipo de cuerpos legislativos, que de existir se considerarán «no soberanos». Etiquetar el federalismo como una «nueva idea» responde al hecho de que postulados similares a los que había promovido la *Imperial Federation League* entre 1883 y 1889 resurgieron con fuerza antes de la I Guerra Mundial, especialmente en algunos enclaves coloniales como Sudáfrica, muy vinculados al denominado *Round Table movement*, que desde 1910 contaba con un importante aparato de circulación de ideas, la revista *The Round Table: A Quarterly Review of the Politics of the British Empire*. Para Dicey, la diferencia entre 1885 y 1910 estribaba precisamente en el impacto de estas ideas en la opinión pública. En 1884, cuando concibió el libro, «las peculiaridades y los méritos del gobierno federal no habían atraído la atención del público inglés» (p. 449). Entre otras cosas, no había políticos con el suficiente peso defendiendo la formación de un Estado federal. Las cosas habrían cambiado, a juicio de Dicey, en 1914. Para quien se acerca a ambos contextos, sin embargo, no parece que haya una distancia tan grande entre los planteamientos y el impacto inicial de la *Imperial Federation League* y los planteamientos y el impacto inicial del *Round Table movement*. Más bien cabría pensar que el apoyo de algunos Miembros del Parlamento de los dos principales partidos y de algunos de los académicos más estimados en Oxford y en Cambridge a la Liga creada en 1883 debería haber resultado más llamativo para Dicey que un movimiento de funcionarios coloniales en sus respectivos destinos periféricos.

Seguramente la clave para entender este distinto rasero se encuentre en ese mismo carácter periférico: mientras que el Dicey de 1915 considera un ejemplo de lo bien que funcionan las relaciones entre la metrópoli y los dominios el éxito y la institucionalización de las Conferencias coloniales, que fue precisamente el gran proyecto de la *Imperial Federation League*, lo que preocupa al jurista de esta nueva oleada federalista es el agravio que supone su discurso para Inglaterra. El Dicey más nacionalista aparece en varios pasajes de la Introducción: «¿no es un ejemplo de las confusiones inherentes a cualquier plan de federalismo imperial, y de la ligereza intelectual con la que se han presentado, que nuestros federalistas nunca hayan dado una clara y, por así decirlo, inteligible idea sobre lo que sería bajo un gobierno federal la posición real no del Reino

Unido, sino del pequeño país de tamaño limitado pero aun así de inmenso poder que es concretamente conocido con el augusto nombre de Inglaterra?»<sup>153</sup>.

Además de la apelación a la preeminencia de Inglaterra y la falta de ideas de los federalistas para asegurar su posición en un hipotético Imperio federal, Dicey ofrece argumentos que ya estaban presentes en la primera edición de *El derecho de la constitución*: incompatibilidad del federalismo con la «política histórica» y la «intuición» del constitucionalismo inglés, inestabilidad, generación de lealtades divididas, etc. Parece factible pensar que no era una hipotética mayor fuerza del movimiento federalista lo que movía a Dicey a dar más importancia al tema en 1915, sino más bien el mayor sentimiento de agravio que le suponía pensar que la propuesta se generaba en las colonias en lugar de en la metrópoli —y por algunos de sus amigos—, como había sucedido tres décadas atrás.

Su acercamiento a la soberanía parlamentaria y a las convenciones de la constitución está decididamente marcado por la *Parliament Act* de 1911. Esta norma incrementaba «enormemente la cuota de soberanía poseída por la Cámara de los Comunes», y disminuía «enormemente la cuota de soberanía poseída por la Cámara de los Lores» (p. 402). Importantes convenciones para Dicey devinieron inútiles, como la capacidad para nombrar nuevos Lores con el objetivo de aprobar proyectos rechazados. Del mismo modo, habían surgido otras, como las relativas a la limitación del bloqueo de debates sobre proyectos en las Cámaras. La orientación de la soberanía parlamentaria y la hipotética orientación de las nuevas convenciones constitucionales que pudieran surgir en el futuro se veía muy claro por parte de todos los comentaristas: «el partido en el gobierno, mediante el control de la Cámara de los Comunes, se convertiría en el único y supremo juez respecto del alcance de su poder»<sup>154</sup>. Dicey fue uno de los comentaristas que más insistió en los problemas que esta tendencia podría acarrear, y desde el primer momento participó en proyectos en los que se ponían de manifiesto los peligros de la *Parliament Act* de 1911, en especial su participación en el libro *Rights of Citizenship: A Survey of Safeguards for the People* (1912). En su capítulo Dicey advertía de la posibilidad de reforma de la constitución o de leyes fundamentales del país sin el

<sup>153</sup> De hecho, en la Introducción Dicey se esfuerza por aludir siempre a Inglaterra «deliberadamente» como sinónimo de Gran Bretaña, afirmando que «en ocasiones los escoceses se quejan de que a Gran Bretaña se le llame a menudo Inglaterra. Hablan a veces como si estuvieran de alguna forma misteriosa excluidos de una justa cuota de las ventajas que les corresponden por la unidad de Gran Bretaña. Para cualquiera que investigue el curso actual de la política británica, y aún más de la vida social inglesa desde el comienzo del siglo XIX, estas quejas le parecerán totalmente infundadas» (pp. 462-463).

<sup>154</sup> Vernon Bogdanor, «The Liberal Party and the Constitution», *Journal of Liberal History*, vol. 54, 2007, p. 49.

consentimiento de la nación<sup>155</sup>; en la Introducción de 1915 ya disponía de un ejemplo inmejorable para reforzar su intuición: «es cierto que una gran parte del electorado se oponía vigorosamente al *Home Rule Bill* [...] ningún observador imparcial puede negar, por lo tanto, la posibilidad de que un cambio fundamental en nuestra constitución pueda ser llevado a cabo contra la voluntad de la nación» (p. 430).

Su acercamiento a la noción de *rule of law* tomaría un rumbo distinto. La aborda de dos maneras: a propósito de la comparación con Francia, y en relación con el descenso en la «reverencia» hacia la ley en Gran Bretaña. Dicey reconoce algo más abiertamente que en 1908 la tendencia hacia la convergencia entre los sistemas inglés y francés, apoyándose para el primer caso en la obra sobre el desarrollo de la burocracia en Inglaterra de Ramsay Muir; pero en todo caso dedica un espacio excesivo a hacer conjeturas acerca de la idea de *décentralisation par service* planteada por Duguit. En definitiva, con semejantes pinceladas Dicey nos demuestra que está al día en la literatura, pero no por ello deja de concluir que «el leve parecido en aumento entre el *official law* de Inglaterra y el *droit administratif* de Francia no debe ocultar el hecho de que el *droit administratif* aún contiene ideas ajenas a las convicciones inglesas en relación con el *rule of law*, y especialmente a propósito de la supremacía de los tribunales ordinarios» (p. 424). El otro sentido desde el que Dicey se acerca a la idea de *rule of law* está menos condicionado por sus acercamientos previos y nos dice más del momento político en el que se escribe. El jurista se muestra preocupado porque no solamente ha descendido el respeto hacia la ley, sino que, por el contrario, han surgido determinadas corrientes caracterizadas por un «entusiasmo por la ilegalidad». Sufragistas, sindicalistas o clérigos actúan, para Dicey, con la convicción de que es digno de alabanza infringir la ley si semejante infracción se estima justa o deseable. Este último punto está en estrecha conexión con uno de los principales caballos de batalla de Dicey en aquellos años, y de hecho ocupa la primera posición en las «nuevas ideas constitucionales» abordadas en la Introducción: la oposición del jurista al sufragio femenino, definitivamente uno de los extremos más claros a la hora de constatar su desubicación a propósito de los asuntos políticos centrales de la era eduardiana.

Su manera de abordar la cuestión en 1915 requiere ser complementada con su opúsculo *Letters to a Friend on Votes for Women* (1909), base de buena parte de los argumentos que desplegaría seis años después. Más allá de subterfugios como su recurrente apelación a «la naturaleza de las cosas», o su refutación de los principales

---

<sup>155</sup> Albert Venn Dicey, «The Parliament Act, 1911, and the Destruction of All Constitutional Safeguards», en William R. Anson et al., *Rights of Citizenship: A Survey of Safeguards for the People*, Londres, Frederick Warne & Co., 1912, pp. 81-107.



argumentos en favor del sufragio femenino sirviéndose de una perceptible reducción al absurdo de estos, el final del libro de 1909 es muy revelador. En él, Dicey incardina su rechazo al voto para las mujeres en su defensa de la estabilidad del Imperio en un momento en el que las demás potencias se militarizaban de manera más efectiva que el Reino Unido, en el que se encontraba una marcada resistencia a la ley en Irlanda, y en el que el nacionalismo emergía en enclaves como Egipto o la India. El futuro del Imperio estaba en el aire, y en buena medida la oposición de Dicey sobre este particular respondía a la necesidad de defender «los intereses del Reino Unido». Bajo su punto de vista, siendo las mujeres más propensas a verse influenciadas por las emociones, «la necesaria complejidad de nuestra política exterior y colonial hacen más que nunca necesario que el país sea guiado por la mente fría, el objetivo claro y el propósito firme que se encuentra solamente entre los más fuertes y más sagaces de los hombres»<sup>156</sup>. Desde esta perspectiva, es comprensible que en un momento mucho más inestable como 1915 Dicey se reafirmase en esa convicción previa, supeditando todos los demás factores a la estabilidad del Imperio. Precisamente por el mismo motivo se entiende su oposición al movimiento por la representación proporcional, el segundo de los temas que explora en su repaso por los nuevos debates. Aun respetando buena parte de los argumentos de los defensores de este tipo de reformas, el temor a que se produjeran fenómenos de *log-rolling* o intercambio de favores en el seno del legislativo entre los partidos *single-issue* (entre los que incluye indistintamente a nacionalistas, laboristas, anti-vacunas...) llevó a Dicey a oponerse a la representación proporcional.

El último punto del que Dicey se ocupa es para algunos el más extravagante, o al menos el que guarda una menor coherencia con sus planteamientos generales. Creía el jurista que el mecanismo del referéndum podría aplacar las pulsiones partidistas que estaban degradando el sistema parlamentario inglés, y por lo tanto veía con buenos ojos su aplicación en Gran Bretaña. Sus reflexiones sobre la cuestión venían de los debates sobre representación ya existentes en décadas anteriores<sup>157</sup>, en los que Dicey ya había participado activamente<sup>158</sup>. El referéndum trataría de corregir un problema procedimental ocasionado por las maquinarias partidistas, que no serían sino una

<sup>156</sup> Albert Venn Dicey, *Letters to a Friend on Votes for Women*, Londres, John Murray, 1909, pp. 88-90.

<sup>157</sup> Por ejemplo, Goldsworthy Lowes Dickinson, *The Development of Parliament During the Nineteenth Century*, Londres, Longmans, Green, and Co., 1895, pp. 170-176. Dickinson subraya, al igual que haría Dicey en 1915, que buena parte de los reparos al referéndum, aparente gran expresión de la democracia, venían de la mano de los propios demócratas: «Tan esencial es, de hecho, el referéndum para la teoría de la democracia, que cuando encontramos dudas por parte de los demócratas a la hora de aplicarlo, es difícil escapar de la conclusión tan poderosamente sugerida por la historia de que, después de todo, como norma general un demócrata solo es un jacobino disfrazado».

<sup>158</sup> Albert Venn Dicey, «Ought the Referendum to be Introduced into England?», *The Contemporary Review*, núm. 57, 1890, pp. 489-511; Albert Venn Dicey, «The Referendum», *The Spectator*, 6 de julio de 1907, p. 14.

anomalía dentro del modelo consagrado por la soberanía parlamentaria. Y es que, muy influido por el acercamiento al «*party government*» que ofrecían autores como el estadounidense Abbott Lawrence Lowell<sup>159</sup>, Dicey concluyó desde la década de 1890 que el gobierno parlamentario había degenerado en una suerte de partidismo<sup>160</sup>. Se percató, nos dice Julia Stapleton, del espíritu sectario que amenazaba con convertir una característica tan central para Dicey como la soberanía parlamentaria en un mero instrumento de los grupos de presión políticos<sup>161</sup>. Precisamente por esto no parece ser muy acertada la lectura que sugiere que del apoyo del jurista al referéndum se puede extraer su apoyo a la soberanía popular en lugar de la parlamentaria, que ha servido para afirmar que «Dicey no era diceyano»<sup>162</sup>. El referéndum no era una profundización de la democracia, sino más bien un método de corrección de los fallos de esta. La vuelta a Bagehot al final no hace sino profundizar en la desconfianza hacia el gobierno popular y sus derivas partidistas: «la mente común ordinaria es muy poco apropiada para determinar por sí misma qué cuestión política debe atender» (p. 475).

Con todo, la Guerra suponía la oportunidad de superar el decadente panorama político. La determinación de «imponer las reglas más puras de justicia internacional y los preceptos más puros de humanidad común» por parte de Inglaterra traía consigo, a juicio de Dicey, buenos presagios. Entre otros, la unión entre todos los ciudadanos de Gran Bretaña. La unión que tantas y tantas veces había defendido en sus escritos, ya fueran políticos o académicos.

Puede haber quien considere la Introducción de 1915 poco menos que como un cúmulo de despropósitos, y no le faltará razón. Pero en cualquier caso es un documento vibrante, tremendamente elocuente. Es el último aliento de ese liberalismo que, como dice Antonio Annino, «murió junto a los diez millones de soldados que perdieron la vida en los campos de batalla» en la I Guerra Mundial<sup>163</sup>. Su interés reside en su desubicación.

---

<sup>159</sup> Prueba de ello es el protagonismo que adquirió en sus lecciones de constitucionalismo comparado el estudio del parlamentarismo, los partidos políticos y la representación en torno al cambio de siglo, que puede constatar en los materiales recogidos en Albert Venn Dicey, *Comparative Constitutionalism* (ed. de John W.F. Allison), Oxford, Oxford University Press, 2013; así como en Albert Venn Dicey, *General Characteristics of English Constitutionalism. Six Unpublished Lectures* (ed. de Peter Raina), Berna, Peter Lang, 2009, pp. 141 y ss.

<sup>160</sup> Angus Hawkins, *Victorian Political Culture: Habits of Heart & Mind*, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 371 y ss.

<sup>161</sup> Julia Stapleton, «Dicey and his Legacy», *History of Political Thought*, vol. 16, núm. 2, 1995, pp. 249-250.

<sup>162</sup> Rivka Weill, «Dicey was not Diceyan», *Cambridge Law Journal*, vol. 62, núm. 2, 2003, pp. 474-494.

<sup>163</sup> Antonio Annino von Dusek, «Liberalismo y democracia: de dos historias a una. Europa 1919-1960, desde Max Weber hasta Norberto Bobbio», *Prismas: Revista de Historia Intelectual*, núm. 16, 2012, p. 12.

Por eso precisamente no es aconsejable acercarse a Dicey a través del Dicey de 1915. Dicey se quedó en 1885.

## VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

Al comienzo de este estudio se lanzaban dos preguntas a partir de la valoración realizada por Anson apenas un año después de la publicación de este libro: cuál es la causa de esa estima tan inmediata hacia Dicey como «artista» y por qué esta obra ha sobrevivido como referente ineludible en el canon del derecho constitucional británico.

Responder a la primera pregunta nos ayuda a responder a la segunda. Dicey se acercó a la constitución estableciendo una síntesis de apenas cuatro elementos (la soberanía del Parlamento, el *rule of law*, las convenciones de la constitución y, deberíamos añadir, el modelo de Estado unitario —o, si lo preferimos, incompatible con el federalismo—), una síntesis concebida para generar polémica, en línea con el estilo metodológico presente en Oxford en los años de formación de Dicey a través de los aportes de Edward Augustus Freeman, uno de los primeros cultivadores del método comparado, célebre por sus polémicas y por su inspiración culturalista. La influencia de Freeman y sus comparaciones entre Inglaterra y Francia a través del análisis de la diferencia entre la cultura germánica y la cultura latina se filtra poderosamente en la concepción de *El derecho de la constitución*. Dicey señaló expresamente que lo que más le interesaba de Freeman era ese espíritu polémico, la forma en la que interpelaba al lector para estar necesariamente a favor o en contra de su posición. El arte de Dicey consistió en aplicar este método no al estudio de cronologías e instituciones remotas como Freeman, sino al propio imaginario constitucional victoriano.

No obstante, si Dicey reflejó simplemente el imaginario constitucional victoriano, cabe pasar a la siguiente pregunta. ¿De dónde viene la supervivencia? Lo mencionado hasta ahora no carece de relevancia en este sentido: la síntesis de elementos es sencilla, y esto unido a la vocación polémica de la obra permitió a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con ella valerse de las mismas armas, de los propios conceptos de Dicey, para criticarla. Y en la práctica esto suponía mantener la operatividad de tales conceptos. Pero cabe añadir que también hay cierta intervención de la contingencia. De no haberse producido un vuelco electoral en 1886, en el que el propio Dicey jugó un papel protagonista, podrían haberse promovido grandes cambios constitucionales que

hubieran dejado inmediatamente desactualizada la obra. Es más, que Anson lanzase elogios sobre el manual de Dicey no es del todo inocente, o al menos podemos decir que no es solo un elogio académico. Anson también formaba parte del grupo de descontentos con el Partido Liberal que pasó a integrar el Partido Unionista Liberal. *El derecho de la constitución* le representaba políticamente, porque uno de sus propósitos subyacentes a esta obra era ofrecer una visión política contraria al *Home Rule* y a las tesis en favor de la federalización del Imperio británico.

Por otro lado, la sencilla disposición de la constitución propuesta por Dicey resultó muy útil para los posteriores docentes o autores de manuales. El jurista perfeccionó la vocación de sus anteriores obras iusprivatísticas sobre las partes en el proceso y sobre el domicilio de las partes: reducir a una serie de principios básicos toda la masa previa de legislación y precedentes. Esto ayudó a perpetuar su modelo y dio proyección a los nuevos estudios de *Jurisprudence* en Oxford, cuya modernización encabezaba el propio Dicey. Pero al mismo tiempo esta sencillez terminaría siendo uno de los blancos predilectos por los críticos del Profesor oxoniense. Es cierto que, debido a ese afán de síntesis, *El derecho de la constitución* es una obra reiterativa y, en ocasiones, algo tramposa. Las omisiones deliberadas de Dicey están ahí. No en vano, nos encontramos ante un conjunto de lecciones, y todo aquel familiarizado con tareas docentes reconocerá la pertinencia de reiteraciones y argucias, en momentos puntuales, a la hora de transmitir ideas que hasta cierto punto pueden resultar elusivas para educandos o, como en este caso, lectores. Por muy paradójico que pueda parecer, tengo para mí que fueron precisamente estas características las que permitieron a Dicey convertir este simple manual en uno de los puntos de referencia básicos para cualquier estudioso del derecho público. La redundante insistencia en sus tesis fundamentales y la instrumentalización hasta el punto del retorcimiento de todo tipo de ejemplos para confirmar sus premisas fueron precisamente los factores clave que permitieron al británico construir un texto extremadamente sugerente y poderoso, considerado con toda justicia como un clásico del constitucionalismo. Admiraremos, en definitiva, a Albert Venn Dicey, artista. Y hagámoslo tal y como él mismo nos pide admirar a los clásicos al principio del libro valiéndose de una cita de Burke: incluso en los extremos en los que no seamos capaces de comprender su genio.

VII. EDICIONES DE *EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN*

- *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (1ª ed.), Londres, Macmillan, 1885.
- *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (2ª ed.), Londres, Macmillan, 1886.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (3ª ed.), Londres y Nueva York, Macmillan, 1889.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (4ª ed.), Londres y Nueva York, Macmillan, 1893.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (5ª ed.), Londres y Nueva York, Macmillan, 1897.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (6ª ed.), Londres y Nueva York, Macmillan, 1902.
- *Bevezetés az Angol Alkotmányjogba* (traducción al húngaro de Tarnai János; revisión de Kautz Gyula), Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia Kiadása, 1902.
- *Introduction a l'étude du droit constitutionnel* (traducción al francés de André Batut y Gaston Jèze), París, V. Giard & E. Brière, 1902
- *Osnovy gosudarstvennago prava Anglii: vvedenie v izučenie anglijskoj konstitucii* (traducción al ruso de O. V. Poltoratskaia; introducción de Paul Vinogradoff), Moscú, Tipogr. Tovarîšestva I. D. Sytina.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (7ª ed.), Londres, Macmillan, 1908.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (8ª ed.), Londres, Macmillan, 1915.
- *Ying xian jing yi* (traducción al chino de Lei Peihong), Shanghai, Shang wu yin shu guan, 1930.
- *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (9ª ed., introducción y apéndice de E.C.S. Wade), Londres, Macmillan, 1952.

- *Einführung in das Studium des Verfassungsrechts* (edición de Gerhard Robbers; traducción al alemán de Sona Rajani y Christian Meyn; introducción de E.C.S. Wade), Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2002.
- *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese* (traducción al italiano de Alessandro Torre), Bologna, Il Mulino, 2003.
- *The Oxford Edition of Dicey, Volume I: The Law of the Constitution* (edición de J. W. F. Allison), Oxford, Oxford University Press, 2013.

#### VIII. BIBLIOGRAFÍA SELECTA DE ALBERT VENN DICEY

- *The Privy Council: The Arnold Prize Essay 1860*, Oxford, T & G Shrimpton, 1860.
- «The Balance of Classes», en George Charles Brodrick et al., *Essays on Reform*, Londres, R. Clay, Son, & Taylor Printers, 1867, pp. 67-84.
- *A Treatise on the Rules for the Selection of the Parties to an Action*, Londres, William Maxwell & Son, 1870.
- *The Law of Domicil as a Branch of the Law of England*, Londres, Stevens and Sons, 1879.
- *Can English Law Be Taught at Universities?*, Londres, Macmillan, 1883.
- *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*, Londres, Macmillan, 1885.
- «Federal Government», *Law Quarterly Review*, vol. 1, núm. 1, 1885, pp. 80-99.
- *England's Case against Home Rule*, Londres, John Murray, 1886.
- *Letters on Unionist Delusions*, Londres y Nueva York, Macmillan, 1887.
- *The Veredict: A Tract on the Political Significance of the Report of the Parnell Commission*, Londres, París y Melbourne, Cassell & Company, 1890.
- «Ought the Referendum to be Introduced into England?», *The Contemporary Review*, núm. 57, 1890, pp. 489-511.
- *A Leap in the Dark or Our New Constitution*, Londres, John Murray, 1893.

- (con John Bassett Moore), *A Digest of the Law of England with Reference to the Conflict of Laws with Notes of American Cases*, Londres, Stevens and Sons, 1896.
- «The Teaching of English Law at Harvard», *Harvard Law Review*, vol. 13, núm. 5, 1900, pp. 422-440.
- «Droit Administratif in Modern French Law», *Law Quarterly Review*, vol. 17, 1901, pp. 302-318.
- *Lectures on the Relation Between Law & Public Opinion in England during the Nineteenth Century*, Londres y Nueva York, Macmillan, 1905 [hay versión en castellano: *Lecciones sobre la relación entre derecho y opinión pública en Inglaterra durante el siglo XIX* (traducción de Manuel Salguero e Isabel Molina Marín), Granada, Comares, 2007].
- *Letters to a Friend on Votes for Women*, Londres, John Murray, 1909.
- «The Extension of Law Teaching at Oxford», *Harvard Law Review*, vol. 24, núm. 1, 1910, pp. 1-5.
- «The Parliament Act, 1911, and the Destruction of All Constitutional Safeguards», en William R. Anson et al., *Rights of Citizenship: A Survey of Safeguards for the People*, Londres, Frederick Warne & Co., 1912, pp. 81-107.
- *A Fool's Paradise, Being a Constitutionalist's Criticism on the Home Rule Bill of 1912*, Londres, John Murray, 1913.
- *How we Ought to Feel about the War*, Oxford, Oxford University Press, 1914.
- «Introduction», en William Wordsworth, *Tract on the Convention of Cintra with an Introduction by A.V. Dicey*, Londres, Humphrey Milford, 1915.
- «The Development of Administrative Law in England», *The Law Quarterly Review*, vol. 31, 1915, pp. 148-153
- (con Robert S. Rait), *Thoughts on the Union between England & Scotland*, Londres, Macmillan, 1920.
- «Blackstone's Commentaries» (1909), *Cambridge Law Journal*, vol. 4, núm. 3, 1932, pp. 286-307.
- *Comparative Constitutionalism* (ed. de John W.F. Allison), Oxford, Oxford University Press, 2013.

IX. REFERENCIAS SECUNDARIAS BÁSICAS SOBRE *EL DERECHO DE LA CONSTITUCIÓN*

- Allison, J. W. F., *The English Historical Constitution: Continuity, Change and European Effects*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- Allison, J. W. F., «History in the Law of the Constitution», *Journal of Legal History*, vol. 28, núm. 3, 2007, pp. 263-282.
- Arndt, H. W., «The Origins of Dicey's Concept of the 'Rule of Law'», *The Australian Law Journal*, núm. 31, 1957, pp. 117-123.
- Arthurs, H.W., *'Without the Law': Administrative Justice and Legal Pluralism in Nineteenth-Century England*, Toronto, University of Toronto Press, 1985.
- Cassese, S., «Albert Venn Dicey e il Diritto Amministrativo», *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 19, 1990, pp. 5-82.
- Costa, P. y Zolo, D. (eds.), *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Milán, Feltrinelli, 2002.
- Harden, I. y Lewis, N., *The Noble Lie: The British Constitution and the Rule of Law*, Londres, Hutchinson, 1986.
- Hewart, G., *The New Despotism*, Londres, Ernest Benn, 1929.
- Jennings, W. I., *The Law and the Constitution*, Londres, University of London Press, 1933.
- Jennings, W. I., «In Praise of Dicey, 1885-1935», *Public Administration*, vol. 13, núm. 2, 1935, pp. 123-134.
- Jennings, W. I., *The British Constitution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1941.
- Jouanjan, O. y Zoller, E. (eds.), *Le «moment 1900»: Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux États-Unis*, París, Éditions Panthéon-Assas, 2015.
- Lacché, L. et al., «Il pensiero costituzionale di Albert Venn Dicey», *Giornale di Storia costituzionale*, núm. 13, 2007.
- Laski, H., «Le règne de la loi en Angleterre», *Annuaire de l'Institut international de droit public*, vol. 1, 1930, pp. 711-731.
- Lawson, F. H., «Dicey Revisited I», *Political Studies*, vol. 7, núm. 2, 1959 pp. 109-126.
- Lawson, F. H., «Dicey Revisited II», *Political Studies*, vol. 7, núm. 3, 1959, pp. 207-221.



- Lino, D., «Albert Venn Dicey and the Constitutional Theory of Empire», *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 36, núm. 4, 2016, pp. 751-780.
- Loughlin, M., *Public Law and Political Theory*, Oxford, Clarendon Press, 1992.
- May, C. y Winchester, A. (eds.), *Handbook of the Rule of Law*, Cheltenham, Edward Elgar, 2018.
- McAuslan, P. y McEldowney, J. F. (eds.), *Law, Legitimacy and the Constitution: Essays Marking the Centenary of Dicey's Law of the Constitution*, Londres, Sweet & Maxwell, 1985.
- Robson, W. A., *Justice and Administrative Law*, Londres, Macmillan, 1928 [en esta obra en particular conviene remitirse a ediciones posteriores: a partir de la segunda edición, publicada en 1947 por Stevens and Sons, Robson incluye un análisis crítico del diceyano *Committee on Ministers' Powers*].
- Walters, M. D., «Dicey on Writing the Law of the Constitution», *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 32, núm. 1, 2002, pp. 21-49.